

SOCIEDAD Y POLITICA 10

COMO USAR
LA DEMOCRACIA anibal quijano

¿ QUE PASARA
CON EL APRA ?

césar germaná

OPORTUNISMO Y GOLPISMO EN LA
IZQUIERDA lópez soria

BOLIVIA: CAUSAS DE LA DERROTA
josé oruro

POLONIA: PC ENTRE EL PODER Y LA
REVOLUCION krystof pomian

SOCIEDAD Y POLÍTICA

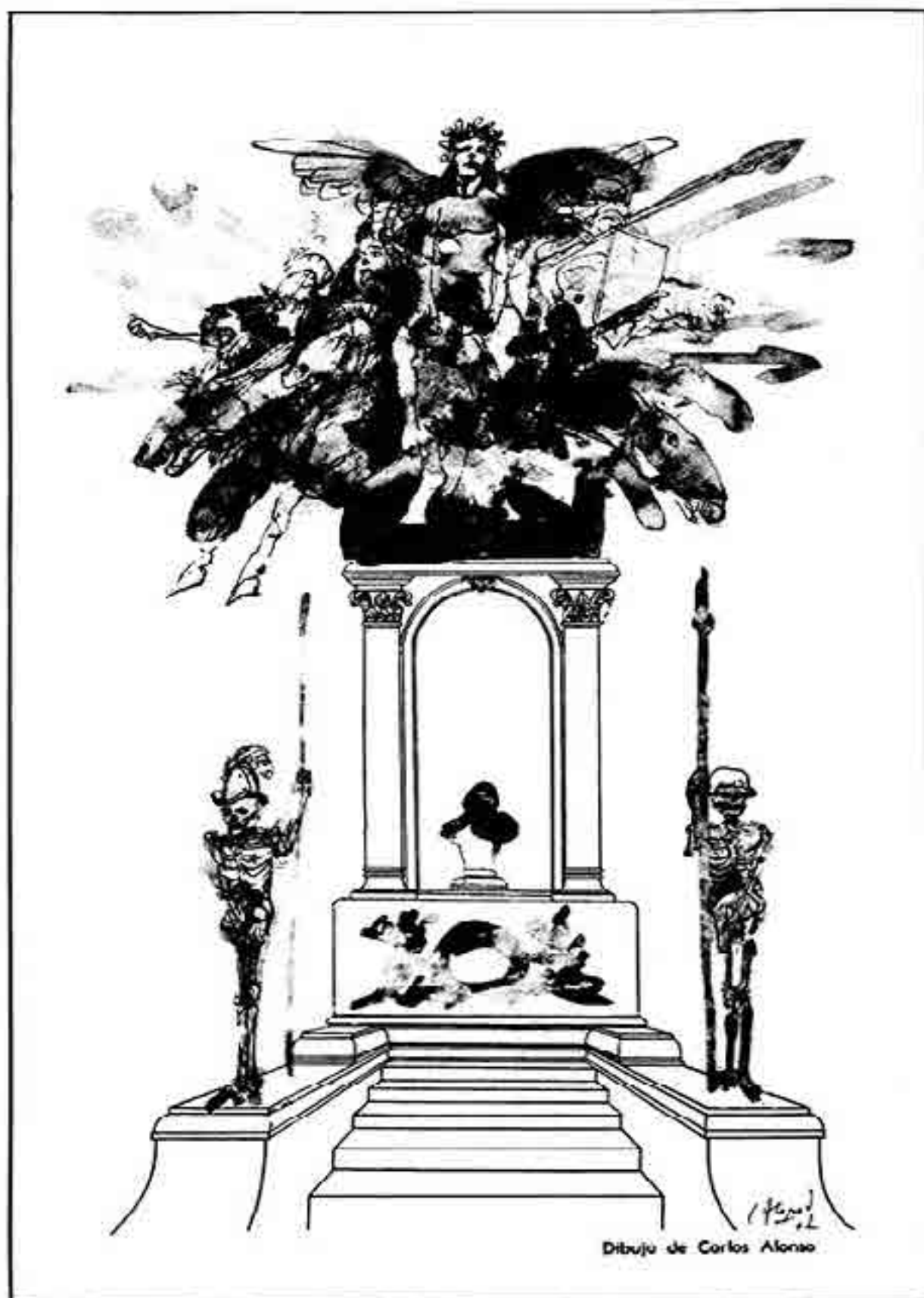
AÑO 3 - REVISTA TRIMESTRAL - No. 10 - NOVIEMBRE 1980 - LIMA-PERU

DIRECTOR: Aníbal Quijano
REDACCION: Roberto Arroyo
 César Germaná
 Mirko Lauer
 Rodrigo Montoya
 Peri Paredes
 Felipe Portocarrero
 Manuel Valladares
 Abraham Zevallos
DISEÑO GRAFICO: Jesús Ruiz Durand

INDICE

EDITORIAL	Pág. 2
Los usos de la democracia burguesa Aníbal Quijano	7
La crisis del Apra César Germaná	17
Bolivia: La tragedia de las equivocaciones José Oruro	25
Oportunismo y golpismo en la izquierda José Ignacio López Soria	42
Periodistas: De una patronal a otra Mirko Lauer	47
Polonia: PC ¿Fuerza dirigente o instrumento de dominación? Krystof Pomian	51

Apartado 11154 Santa Beatriz - Lima-Perú
 Publicación y Distribución: Empresa Editora Sociedad y Política.
 Suscripción Anual: En el Extranjero \$ 20
 Para Suscripción y Correspondencia dirigirse a Sociedad y Política. Ap. Postal 11154,
 Santa Beatriz, Lima - Perú.



Dibujo de Carlos Alonso

EDITORIAL

¿QUO VADIS, DOMINÉ?

"Como en las caudalosas llanuras del poniente el cielo es monumental, pero la tierra es pobre".

Jorge Luis Borges

Dos meses apenas después de la instalación del nuevo gobierno, con el respaldo masivo de la votación civil y de las fuerzas armadas, nadie en el Perú podría no ver las trizaduras que han comenzado a hacer visibles los graves fallos estructurales —como los arquitectos dirían— en la edificación del consenso que los materiales electorales parecían fundar.

Mientras los trabajadores, cercados por más de cinco años de represión, desempleo, inflación, reducción del poder adquisitivo de los salarios y de la provisión de servicios sociales, salen a las calles y se declaran en huelga demandando empleo y mejoras salariales, la política económica de Belaúnde-Ulloa se destina a profundizar y a ampliar las líneas centrales de la que se inició bajo Morales-Silva Ruete, en favor de una más completa y concentrada dominación del capital monopolístico internacional, y que implica precisamente desempleo, inflación y bajos salarios.

Los intereses inmediatos que representa y ejecuta la fracción burguesa en el poder estatal, chocan abiertamente con los de la inmensa mayoría de los explotados, tanto más intensamente cuanto más rápidamente se desenvuelve la política económica belaudista, que aprovecha nada menos que la legitimidad inicial del reemplazo democrático a una odiada dictadura militar, es decir, la votación de las propias masas trabajadoras y de la mayoría de sus direcciones políticas de izquierda, para acelerar el curso de sus acciones.

A la movilización de los trabajadores explotados, Belaúnde-Ulloa contestan con el escarnio del reclamo de "tregua laboral", a pesar de que las propias cifras acumuladas en el mensaje de Ulloa ante el Parlamento, sirven para probar la profundidad de la explotación y de la miseria a que las masas han sido sometidas durante la dictadura militar y que sus dehen continuar si la democracia burguesa ha de servir a los explotados para algo más que legitimar con sus votos la continuidad más franca de la política económica dictatorial bajo un régimen civil.

Y como el movimiento obrero-popular no puede, aunque quisiera, otorgar esa "tregua", Belaúnde y sus principales ministros salen a las tribunas oficiales para amenazarlo con la represión y para conminar a las fuerzas policiales a la ejecución de esa sentencia, por supuesto dentro de las leyes y de la democracia. Los choques de los trabajadores contra los palos y las bombas lacrimógenas de la policía, los racimos de tropas policiales en las calles, continúan siendo el decorado habitual del escenario peruano, como ilustración dramática de que la democracia burguesa, bajo el régimen actual, no sirve para alterar las bases de la política de la dictadura.

Las amplias masas trabajadoras que votaron por Belaúnde, en gran medida por las ilusiones alimentadas por la izquierda en el cielo de las promesas belaudistas de devolverles sus derechos democráticos de empleo y salarios suficientes, sin duda continúan a sentir en la prolongación de su miseria la vanidad de semejantes ilusiones. Y las organizaciones de izquierda que votaron por el belaudismo como "mal menor" frente al monstruo aprista, se encuentran de improviso marchando del brazo del monstruo en la empalmeada oposición parlamentaria y en las calles.

El rápido desocultamiento de la ficción del "mal menor" para las masas, que probablemente esperaban más lento los dueños de Acción Popular y las fuerzas armadas, dada una votación tan amplia y desde todos los sectores sociales y políticos del país, fue sin duda, mucho más que el marginal ejercicio pedrardista, extraviado de contexto y de sentido aunque fueran honradas las gentes que lo practican, lo que impulsó las escaramuzas entre un jefe policial que procuraba acuciar la represión con el cuento de un plan subversivo a escala nacional y su Ministro del Interior saliendo a desmentirlo. Banal como parece, este dato pone al descubierto la ansiedad represiva y de poder replegado en las fuerzas armadas bajo las circunstancias, especialmente si se considera que el gobierno, sin llegar hasta quitar la cara del Ministro de la escena, fue obligado a batirse en retirada inventando un modo tonto de desagraviar al jefe policial en lugar de sancionarlo. No será una sorpresa si es el Ministro mismo el que sea obligado a ocupar un cargo diplomático u otro, para dejar el Gabinete. De todos modos, el gobierno civil depende tanto del poder militar que hasta ahora no ha podido o no ha querido romper la perla fosa que sobre la democracia puso la dictadura con la Ley de Movilización Nacional, rigurosamente apta para enmarcar, legalmente, una dictadura fascista cuando sea conveniente a la burguesía y a las fuerzas armadas.

EDITORIAL

Esos no son los únicos elementos que van acortando el horizonte de la democracia burguesa en el Perú post-velasquista, en duración y en profundidad. La manera intensa en que, no obstante su carácter gradual, se pone en acción la política económica de Belaúnde-Ulloa para impulsar la concentración de capital bajo control monopolístico internacional, no puede evitar introducir brechas en el seno mismo de la burguesía, levantando la protesta de la mediana y pequeña burguesía industrial, principalmente, por los efectos que recaen sobre ellas por la política comercial, fiscal y monetaria del régimen, en el mismo momento en que arrecian las presiones de los trabajadores. Esos conflictos dentro de la burguesía ya están repercutiendo y tenderán a desarrollarse, en el seno de la alianza AP-PPC y dentro de las propias huestes de Acción Popular, y agotando las virtudes de la retórica señorial del Arquitecto.

Por otro lado, en el derrotado partido aprista, huérfano del carisma aglutinador de Haya, no sólo porque él tenía un lugar y un papel patriarcal, sino ante todo porque esas calidades contenían en un único mando todas las contradicciones del universo aprista, las luchas de clases surcan de punta a cabo todo su territorio social y orgánico, diferenciándolo entre las principales líneas de su contradictoria historia y estructura. Hasta hoy, han asumido solamente las diferencias del ala más liberal de la socialdemocracia criolla con el grueso del partido. Pero no hay duda de que dentro de ese último, corrientes aún más radicales pugnan por expresar las presiones populares y que no tardarán en salir a la superficie.

De ese modo, la expectativa de un orden bi-partidista para la estabilización de la democracia burguesa en el país, con turnos entre los liberales (vestidos de parches populistas) y los socialdemócratas (en la oposición, radicales), para mantener a las masas prisioneras entre esas opciones, encuentra bases cada vez más precarias para sostenerse.

En resumen, rápido agotamiento de las ilusiones belaudistas entre los trabajadores organizados y reingreso de la represión policial contra sus movilizaciones reivindicativas. Fracturas de potencial desarrollo en el seno de la burguesía y de sus representaciones políticas en el gobierno. Fracturas de dudosa curación en el partido político más capaz de impedir la corrida de las masas hacia organizaciones de izquierda, mientras dure el actual gobierno. Primeras escaramuzas con las fuerzas policiales, que no estarían desvinculadas de las desazones en las fuerzas armadas. Todo eso, en sólo dos meses!

LAS PERSPECTIVAS PROXIMAS

Sería simplista desprender de este cuadro, que las tendencias que lo configuran van a desplegar cada una y en conjunto todas sus virtualidades de manera inevitable y a ritmo rápido, haciendo que el régimen se descomponga pronto.

La experiencia de la dictadura militar es aún demasiado viva entre las masas y la burguesía. Cada cual por sus propias razones, no están listas para desprenderse del manto de la recién ganada democracia burguesa. La segunda, porque mientras la presión de las masas y las fricciones entre sus propias fracciones puedan todavía ser administradas, puede usar extensamente la legitimidad y la legalidad del régimen civil para avanzar en la reorganización de las bases de su ganancia y de su poder. Las primeras, porque no obstante que las concesiones que el gobierno ha hecho hasta ahora a sus demandas son insuficientes, han conseguido algunas importantes aunque parciales y por sectores, especialmente los asalariados de la administración pública, y en consecuencia pueden mantener una buena parte de sus expectativas en el nuevo gobierno.

Si bien la mediana y pequeña burguesía industrial están muy inquietas con las medidas arancelarias y financieras de Belaúnde-Ulloa, en cambio la mediana y pequeña burguesía agraria y comercial pueden encontrar razones importantes para mantener su adhesión básica al gobierno, puesto que a la primera se le otorga incentivos de precios, y la segunda puede pensar que la ampliación de la importación y la reactivación general del comercio le permitirán beneficiarse. Y desde luego la burguesía que controla los negocios de la construcción, así como la amplia capa media profesional ligada a ella, saben que apenas comienza su propio festín en esta etapa. Son

EDITORIAL

mucho más amplias y más influyentes políticamente todas estas fracciones burguesas y capas medias, que los grupos de mediana burguesía industrial que protesta. Debe recordarse que frente a esa protesta, la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), hizo público su apoyo a las mismas medidas.

Las fuerzas armadas están a cubierto de cualquier presión importante por su participación en la corrupción de estos doce años, y sus privilegios institucionales garantizados plenamente. Una buena parte de sus cuadros salió de la agitación administrativa respirando aliviada, y sus mandos principales cogobiernan desde sus cuarteles. Y aunque la agitación social actual no es pequeña, tampoco da muestras de encontrar canales orgánicos y políticos para desarrollarse pronto hasta convertirse en una amenaza próxima de cooptación política, y generar en las fuerzas armadas tendencias de rápido regreso al primer plano del poder político.

El Estado puede aún disponer de recursos suficientes como para canalizarlos a la creación de empleo coyuntural de magnitud no desdeñable, por medio del negocio de la construcción de caminos, de vivienda y de edificaciones públicas. A medida que esos planes se materialicen en los próximos meses, un sector de trabajadores considerable, aunque no mayoritario, entre la masa desempleada, puede ser retenido mientras eso dure en sus expectativas sobre este gobierno o por lo menos fuera de la movilización reivindicativa más radical.

Así, pues, las bases objetivas y políticas para administrar los conflictos actuales, amortiguando su potencial explosivo, están aún a disposición del gobierno belaudista. Y, además, la izquierda organizada en su amplia mayoría, claramente concentra sus esfuerzos en ganar a las masas para el apoyo a la acción parlamentaria o en el terreno que puede aún ganar electoralmente en otras instituciones menores del Estado burgués, terrenos en los cuales por el casi completo control del belaudismo-bodoyismo y por la debilidad de la propia estrategia de movimientos de la izquierda, ésta no puede convertirse por modo alguno en un factor de conflicto muy importante.

La división en las filas del Apra, por el momento va resultando en la moderación de los arrebatos radicales del sector oficial, para dar cabida a una conciliación con los sectores liberales; es posible que el descontento de las bases más radicales con esa conducta de sus dirigentes lleve a desprendimientos de algunas de esas bases, e incline a manifestar su descontento concurriendo a la votación de la izquierda en las próximas elecciones municipales. Pero, en todo caso, esa conciliación interna entre las direcciones de las principales corrientes del Apra, implica igualmente una conciliación real con el régimen belaudista, más allá de gestos efecistas en el parlamento, en aras de la defensa de la democracia, formalmente, y de intereses de importantes sectores de mediana y pequeña burguesía y de capas medias profesionales y burocráticas, en realidad.

Por tales razones, es improbable que las tendencias iniciadas hacia el deterioro de las bases políticas del nuevo régimen tengan un desenvolvimiento precipitado, sin que eso niegue la continuidad de su actuación. Lo que no es improbable, en cambio, es la creciente reducción de los límites del ejercicio democrático de los derechos de las masas, de modo más o menos rápido. En otros términos, el régimen belaudista puede defender su estabilidad y administrar sus conflictos a costa de limitar en amplitud y en profundidad su carácter democrático.

Y nada eso es inesperado o sorprendente. En América Latina lo que sería sorprendente sería una democracia burguesa exenta de represión abierta y de límites legales y administrativos a los derechos de las masas, y en particular en un país de pobre desarrollo capitalista, atravesado de las urgencias de reorganización de la estructura de acumulación y distribución del capital monopolístico internacional. El ciclo ideológico socialdemócrata o liberal-populista puede ser monumental, pero su tierra es miserablemente pobre en el Perú.

EL CAMINO DE LOS TRABAJADORES

Dentro de este cuadro y de estas perspectivas coyunturales, cuya duración dependerá mucho de cómo actúen las masas explotadas y sus direcciones políticas, tanto como del comportamiento del capital internacional y de su crisis, aquellas confrontan un problema central: la defensa y la ampliación del espacio político de ejercicio de sus derechos democráticos, nuevo y base de todo avance y aún de mantenimiento de sus conquistas materiales y políticas hoy.

Contra el mendaz macartismo de la campaña de prensa de la burguesía, las luchas de los explotados en la actual coyuntura no tienen, ni pueden tener un carácter subversivo. Por la elemental razón de que ni política, ni

orgánicamente, tenemos todavía la fuerza necesaria para desembarazarnos de los límites de la democracia burguesa imponiendo la democracia directa de los trabajadores y venciendo la otra opción burguesa de sostener su dominio, la dictadura militar.

De allí no se sigue, en sentido alguno, que nuestra tarea sea la defensa de la democracia burguesa tal como ella puede existir en nuestra tierra, sino la necesidad de luchar por ampliar y profundizar el espacio del ejercicio de nuestros derechos democráticos dentro del marco democrático-burgués.

La burguesía trata de imponernos la idea y la práctica de que la única forma de ejercicio de nuestros derechos democráticos, es participar en sus instituciones políticas formales, el parlamento, sus tribunales de justicia, sus instancias administrativas y sus ejercicios electorales, porque sabe que en ellas puede ejercer todo su control, e impedir que prosperen nuestras demandas y necesidades. Una buena parte de las actuales direcciones de izquierda, concurren a abonar esa imposición, porque su práctica y en ciertos casos también su prédica, arrastran a las masas al apoyo de esos partidos para que ellos participen en esas instituciones.

No se trata, como es obvio, de no participar en esas elecciones e instituciones del Estado burgués. Pero es solamente una de las arenas de la lucha democrática, y no es la principal. Puesto que en esas formas, de antemano sabemos que no podemos conseguir sino muy poco de lo que necesitamos, es la movilización directa, con nuestras propias organizaciones de base (sindicatos, comités locales, organizaciones barriales), el terreno principal de nuestra acción, y para apoyar ésta es que deben ser usadas la institucionalidad y la legalidad del Estado burgués.

No se trata, por eso, de pedir al gobierno de Belaúnde que cumpla con sus promesas. No se puede curar una ilusión (haber creído en promesas, a sabiendas de que Belaúnde es el jefe de la clase enemiga) con otra peor (creer que efectivamente Belaúnde puede beneficiar a los trabajadores contra la burguesía). De lo que se trata es de impedir que lleve a la práctica su política al servicio del capital imperialista e interno, asociados, hasta donde nos permitan nuestras fuerzas en cada momento.

Para eso, es la organización de nuestras fuerzas la condición principal. Esas fuerzas no pueden provenir de luchas dispersas, aisladas y puramente reivindicativas contra los efectos de la política del gobierno y de los empresarios y no contra esa política misma, global y sectorialmente. Y no pueden desarrollarse tomando parte solamente en las discusiones parlamentarias o en las elecciones, sino participando en ellas para desarrollar nuestras luchas directas.

La lucha por defender, ampliar, profundizar el ejercicio de nuestros derechos democráticos (que incluyen empleo, salarios, servicios de educación, de transporte, de vivienda, de salud, de servicios de agua, luz, alcantarillado, etc.), requiere no solamente luchar por mejorar en cada empresa los salarios y obtener empleo o reposición en el empleo, sino también y ante todo cuestionar la entera política económica del Estado, causa de los bajos salarios, de la falta de trabajo, de alzas de precios y de escasez de servicios y de bienes.

Y nada de eso podría hacerse sin unificarnos, sin centralizar y coordinar todas nuestras organizaciones en todas partes, de modo estable y no solamente fugaz como en los últimos paros nacionales, y sin impedir la apropiación burocrática de la dirección de nuestros organismos que impide la presencia y la dirección desde las bases, rompe y divide nuestras movilizaciones y abre el paso al éxito de la represión.

De esa orientación de nuestras luchas, y de esa unificación orgánica, depende absolutamente la conquista de nuestras actuales reivindicaciones ahora. Y en ellas solamente puede fundarse, la defensa victoriosa contra la represión y las amenazas de regreso de una dictadura militar mucho más repuesta que cualesquiera antes; y solamente de ellas puede partirse al desarrollo de nuestra fuerza revolucionaria en el camino al poder.

Los revolucionarios socialistas, ante todo, tenemos la responsabilidad de estas tareas básicas. Solamente en la medida en que nos empeñemos en ellas, podremos afirmar las bases ya reales de nuestra lucha por la dirección revolucionaria de las masas.

EDITORIAL

El desastre de ARI y la derrota electoral de las masas, ha permitido que la unidad de la izquierda se reconstituya ahora bajo la dirección de las corrientes más confusas y fluctuantes, pasada la oportunidad de que esa unidad pudiera consolidarse bajo la dirección revolucionaria socialista, debido a la torpeza política de las agrupaciones trotskistas. Y en el terreno electoral próximo, esa unidad actual debe ser sostenida.

Sin embargo, la unidad de la izquierda como tal no significa hasta ahora la unidad del movimiento de masas, a través de la unificación y centralización de sus organizaciones de base, precisamente porque gran parte de esta izquierda no está interesada en ello, para poder arrastrar a las masas solamente al apoyo de los partidos en su labor dentro del terreno parlamentario o en las otras instituciones formales del Estado burgués. La unificación de las masas, la centralización de sus organismos y la canalización de sus movimientos hacia la lucha directa, por la ampliación de sus derechos democráticos hoy, dentro del marco burgués, y por la imposición de la democracia directa de los explotados mañana, no se desarrollará sin la dirección de los revolucionarios socialistas. Esa es nuestra responsabilidad de hoy.

Lima, octubre de 1980.



BOLIVIA: LA TRAGEDIA DE LAS EQUIVOCACIONES

josé oruro

Para los explotados, peruanos y ante todo para el proletariado y los revolucionarios socialistas, Bolivia tiene un significado histórico fundamental: Durante los últimos treinta años, es la sede de los más importantes y profundos esfuerzos de los trabajadores de América Latina para conquistar su propio poder, la democracia directa de las masas, a través de sus propias organizaciones y bajo el control inmediato de sus bases y la dirección del proletariado revolucionario. Es decir, para realizar la revolución socialista.

La reciente etapa de esas luchas acaba de cerrarse, desafortunadamente, con la derrota de las masas y la imposición sangrienta de una nueva dictadura militar de expresa orientación fascista. Esta vez, contando con el apoyo y la intervención abierta de militares argentinos. No hace mucho, en nuestro propio país y con la no desmentida complicidad de militares peruanos también, agentes de la dictadura argentina secuestraron y asesinaron a ciudadanos de ese país que luchan contra ella. Estos hechos configuran un cuadro extremadamente grave, pues demuestran la existencia de una asociación contrarrevolucionaria de las fuerzas armadas de estos países.

En consecuencia, la solidaridad de clase con los trabajadores bolivianos no es solamente una forma de la fraternidad. Es, sobre todo, una conducta de autodefensa y de lucha conjunta contra un mismo y común enemigo, el capital internacional e interno, la burguesía imperialista y dependiente, su Estado y sus agentes militares y civiles.

Derrotadas una y otra vez hasta ahora, las masas explotadas bolivianas no han cejado ni cesarán en esta lucha ejemplar para todos los trabajadores de América Latina. Para que en las próximas etapas podamos combatir conjuntamente, es indispensable para todos nosotros estudiar y discutir con la máxima atención esa extraordinaria experiencia. Hacerlo es tanto más urgente y necesario, porque en este mismo momento, en nuestro propio suelo, aparecen claros indicios de que comienzan a actuar fuerzas contrarrevolucionarias que buscan preparar las condiciones de otra etapa de represión sobre las masas, cuyo desarrollo puede llevar a imponer otra dictadura militar similar a las del Cono Sur.

EL CARACTER DE LA CRISIS POLITICA BOLIVIANA

Bolivia es una formación social de contrastes excepcionalmente pronunciados. Principalmente entre el avanzado carácter de sus luchas políticas, pues allí revolución y contrarrevolución se definen en torno de la victoria o la derrota de la revolución socialista, y el no menos notable atraso del desarrollo de su economía capitalista dependiente.

Desde este punto de vista, Bolivia es una ilustración extrema de que no hay ningún automatismo mecánico en las relaciones entre las características de la base económico-social y las de las luchas políticas entre las clases sociales de una determinada formación social. Y de que es indispensable hacer, en cada caso, el esfuerzo de descubrir en la investigación y en la práctica política el carácter específico de las luchas de clases y las condiciones concretas que las determinan, como requisito central de la victoria revolucionaria.

No está aún investigada suficientemente y por eso no está aún contestada, la decisiva pregunta sobre cómo fue posible que el reducido proletariado y en particular el aún más reducido grupo minero de esa clase, en un país de tan bajo desarrollo capitalista, alcanzara el más alto nivel de desarrollo político de todo el proletariado latinoamericano, desde el punto de vista

de su conciencia revolucionaria, durante un período relativamente extenso, a pesar del atraso económico y socio-cultural del conjunto de su sociedad, si se la compara con los vecinos casos de Chile o de Argentina, por ejemplo.

El hecho reconocido es, no obstante, que la presencia de un movimiento obrero con tales características, es lo que otorga a las luchas políticas bolivianas de las últimas décadas no solamente su particular agudeza, sino sobre todo su carácter histórico definido de enfrentamiento permanente y hasta ahora irresuelto entre revolución socialista y contrarrevolución burguesa, desde 1952 en adelante.

A lo largo de los últimos treinta años ni la burguesía ha podido consolidar y legitimar su dominación y mucho menos en condiciones democráticas, ni las masas explotadas y su dirección proletaria han logrado culminar sus esfuerzos de destruir aquella dominación e imponer su propio poder. Eso se traduce, como es notorio, en una crisis política permanente en ese país durante todo este período, que no podría terminar sino con la derrota definitiva de la burguesía y de sus fuerzas armadas o con el aplastamiento y destrucción de los movimientos revolucionarios por un período prolongado.

Lo que da a estas luchas de clases y a la crisis política permanente que ellas han determinado, un significado histórico inicialmente singular en América Latina, es el hecho de que el proletariado revolucionario boliviano y el frente de explotados que conduce, no solamente han hecho explícito el contenido y la finalidad antiburguesa de sus luchas, sino también la radical orientación antiburocrática de las mismas. Esto es, la revolución socialista por la cual esas masas combaten desde hace treinta años, implica la democracia directa de los explotados, su poder directo a través de sus propias organizaciones de masas y por eso bajo el control inmediato de sus bases, como forma institucional del poder político revolucionario, en contra de toda forma de poder que implique un aparato burocrático, administrativo y represivo, separado del control inmediato y directo de las masas, como ocurre con el Estado Burgués y con el Estado burocrático emergido después de la destrucción del anterior.

Y esa orientación a la par antiburguesa y antiburocrática del movimiento revolucionario del proletariado boliviano, no es y no ha sido simple o solamente un postulado ideológico de algunas minoritarias corrientes, sino por el contrario la tendencia práctica y actuante de las masas en todos los momentos más altos del desarrollo de sus movimientos revolucionarios.

De ese modo, la experiencia revolucionaria de los trabajadores bolivianos se inscribe dentro de la ya extensa secuencia de luchas por la democracia directa de las masas, bajo la dirección del proletariado revolucionario, que desde la Comuna de París en 1871 se van multiplicando en diversos y muy distintos escenarios concretos por más de un siglo, demostrando sin lugar a dudas que esa orientación de las luchas de los explotados del capital, no es un sueño utópico sino una tendencia histórica objetiva central del movimiento revolucionario de los frentes de explotados que emergen bajo la dirección del proletariado, y que va fortaleciéndose y ampliándose en todas partes, y que en cada situación en que las masas mismas son las protagonistas de procesos revolucionarios, la forma institucional característica que asume el poder de los explotados del capital es la formación de organismos de poder directamente controlados y gestionados desde las bases, que se articulan y se centralizan, o tienden a ello, como poder global en la sociedad, incorporando así el poder político en la vida diaria de las masas, en contra del surgimiento de un nuevo aparato burocrático, administrativo y coercitivo, cada vez más separado del control de las masas y que las va sometiendo a una nueva dominación.

En esta perspectiva, y en medio de la crisis capitalista internacional y de la crisis de la dominación burocrática que viene avanzando en Europa del Este a pesar de las previas derrotas de los movimientos de masas en Alemania Oriental, en Hungría, en Checoslovaquia, alcanzando un nuevo punto de maduración con las actuales luchas en Polonia, todos nosotros en América Latina y fuera de ella, no podemos dejar de percibir plenamente el porte histórico del significado de la experiencia revolucionaria boliviana para el futuro desarrollo de las luchas por la revolución socialista.

REVOLUCION ANTILIGARQUICO-NACIONALISTA Y REVOLUCION SOCIALISTA

Como es ahora ya suficientemente establecido en la investigación y avanzado en el debate político, la naturaleza y las perspectivas de las luchas de clases en gran parte de América Latina y en particular en los países de más tardía y lenta expansión y generalización del capital, son definidas por la peculiar combinación de los problemas correspondientes a la revolución democrático-nacionalista con los que hacen parte de la revolución socialista, de tal modo que las tareas implicadas en la primera no pueden llevarse a cabo plenamente sino como parte de la segunda, así como las tareas de ésta última no podrían desarrollarse exitosamente sin contener las de la otra.

Ello ha sido el resultado del modo en que, desde fines del siglo XIX, la implantación del dominio del capital ya en su fase monopolista y bajo control imperialista, reconfiguró las bases materiales y sociales y las tendencias del movimiento de las clases y del Estado, a lo largo de un proceso histórico específicamente diferente que en los países principales, de Europa, de Japón y de Estados Unidos.

En tal entraña histórica, las necesidades políticas burguesas democráticas y nacionales no podían asumir el contenido característico de las revoluciones democrático-burguesas europeas, ni ser acalladas por la propia burguesía y asumieron más bien el contenido específico de revoluciones "antiligarquico-nacionalistas", bajo el liderazgo de las capas medias y, después de México, en ningún lugar de América Latina pudieron culminar como tales, sino como Cuba mostró y Nicaragua comienza a corroborar, mutándose en la iniciación del ciclo socialista. Si bien, en consecuencia y como lo sostuvo Mariátegui, en el terreno del movimiento táctico las cuestiones democráticas (pequeño burguesas y populares, hoy por la creciente necesidad antidemocrática de la burguesía) no pueden dejar de ser parte central de la acción agitativa, movilizadora y organizadora, como condición para cimentar y desarrollar vastas alianzas de las clases dominadas y medias, la perspectiva estratégica no puede ser sino la de la revolución socialista, como condición para conquistar la dirección de esa alianza para el proletariado revolucionario, condición, a su vez, para garantizar la culminación exitosa del movimiento y la continuidad y desarrollo del proceso de la revolución, afirmando y consolidando el poder de las masas.

Mariátegui fue el primero en descubrir y sostener, solitariamente, esa especificidad de la historia latinoamericana. Trás su muerte y la prolongada hibernación de su pensamiento político, factores sociales e ideológicos bloquearon la fecundidad de sus descubrimientos en las luchas revolucionarias de estos países. Stalinistas y Trotskistas, cada cual a su modo, contribuyeron a ese resultado, pavimentando el camino de la mistificación de tipo aprista en la conciencia de las masas. A pesar de eso, y como lo prueban las experiencias de Cuba y Nicaragua, triunfantes, y de Bolivia y Chile, derrotadas, la práctica viva de las luchas de clases no podía dejar de poner al descubierto la actuación de esas determinaciones históricas particulares que Mariátegui había señalado. En América Latina, en

general, y en los países andinos en particular, no hemos aún terminado de cancelar esa larga etapa de confusión, pues aunque nuevos partidos y tendencias han entrado en escena después de la revolución cubana y de la ruptura chino-rusa, es aún irregular y lento el proceso de clarificación de este debate.

Bolivia es uno de los escenarios privilegiados de la actuación de estos factores ideológicos, de su entrelazamiento con las inevitables tendencias de las masas a orientarse en su movimiento por encima de esas confusiones, así como de los límites y frustraciones que de esa situación continúan resultando. La etapa reciente y la derrota de las masas, no podrían ser explicadas por fuera de esas cuestiones.

LA CRISIS DEL ESTADO OLIGARQUICO

El primer momento en que las cuestiones de la "revolución antioligárquico-nacionalista" y las de la "revolución socialista" aparecen cruzándose en las luchas de clases de Bolivia, fue la revolución de 1952.

Aquella fue la culminación de un agitado proceso que se inicia inmediatamente después de la derrota boliviana frente a Paraguay en la llamada Guerra del Chaco, (1932-35), y cuyos efectos políticos fueron en muchos sentidos equivalentes a los que produjo en el Perú la derrota frente a Chile.

La crisis abierta de la dominación oligárquica se inició con enfrentamientos violentos entre sus diversas fracciones, incluidos golpes militares, principalmente los del General Toro, que hasta llegó a reclamarse de un "socialismo de Estado" aunque era un instrumento imperialista (Standard Oil) y de las fracciones más reaccionarias de la "rosca" oligárquica, y del General Busch quien encabezó una suerte de cesarismo nacionalista y fue prontamente derrocado.

Durante este período, el proletariado minero, el campesinado y las capas medias antioligárquicas y nacionalistas entran también en movilización buscando una salida propia a la crisis oligárquica. Diferenciándose de ellos, núcleos de terratenientes, intelectuales y capas medias reaccionarias se orientan en una dirección explícitamente fascista. Y por su parte, la oficialidad joven, descontenta con la incapacidad y la corrupción del poder oligárquico tradicional, se organiza en grupos conspirativos.

Resultado de estas movilizaciones fue, en primer término, la organización del Partido Obrero Revolucionario (POR), de filiación trotskista en 1935; del Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), 1940, de confusa ideología democrática salpicada de formulas "socialistas", en donde se agrupaban intelectuales radicales y donde actuaban también los primeros núcleos políticos vinculados a la Tercera Internacional stalinista, de manera encubierta; a comienzos de la década de los 40 se organiza el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con ideología, programa y formas de organización de clara influencia aprista, bajo el liderazgo de Paz Estensoro. Los oficiales jóvenes se organizaron en lo que finalmente se llamó la logia RADEFPA (Razón de Patria), y los grupos fascistas, en la línea de Primo de Rivera y de Mussolini, en la Falange Socialista Boliviana (FSB) (1937).

Esa etapa de fermento político-social, dio lugar en 1943 a un putsch militar encabezado por el Teniente Coronel Gualberto Villarroel, que en alianza con el MNR asume el gobierno, con una postura nacionalista y reformista, pero cuya conducta autoritaria y burocrática traducía el interés de bloquear la movilización independiente de las masas. Sin embargo, su prédica nacionalista y antioligárquica, aunque no respaldada por me-

didias reales que destruyeran las bases sociales del poder oligárquico-imperialista, al mismo tiempo que despertaba las expectativas de las masas ya en estado de agitación, concitó igualmente la furiosa reacción oligárquica e imperialista que respondía acusando al nuevo régimen de fascista y ligazo al eje nazi-fascista en plena guerra contra las potencias imperialistas antinazis aliadas en ese momento a la Unión Soviética staliniana. El PIR, en donde operaban los grupos comunistas de orientación stalinista, se sumó a esas acusaciones, en seguimiento de la línea general impuesta a todos los partidos comunistas o vinculados a ellos como en el caso del PIR, de un frente nacional con las oligarquías locales contra el fascismo. Esa política, bajo la guía de Earl Browder (entonces jefe del PC norteamericano), se constituyó en el espurio equivalente de los frentes populares europeos donde participaban los partidos comunistas stalinianos, ya que en América Latina ello implicaba una alianza con las oligarquías proimperialistas contra los movimientos de las masas. Fue este "browderismo" el que en el Perú, como se recuerda, durante la misma etapa, llevó al PCP al apoyo al gobierno de Manuel Prado contra la oposición aprista, facilitando así la canalización de las masas en el aprismo.

El gobierno Villarroel-MNR tuvo un final sangriento en julio de 1946, cuando una insurrección apoyada por la reacción oligárquica e impulsada por el PIR lo derrocó y culminó con la masacre de numerosos integrantes del régimen, incluido el propio Villarroel, a quienes colgaron de los faroles de las calles de La Paz, como reacción a las arbitrariedades autoritarias de Villarroel, los asesinatos políticos de Challacollo y Chispata y el atentado contra José Antonio Arze, el jefe del PIR.

La insurrección popular que derrocó a la dictadura de Villarroel-MNR, tuvo un carácter ambiguo. Si bien fue una reacción a las arbitrariedades y crímenes políticos cometidos bajo el amparo del gobierno, y a las escasez y carestía de las subsistencias, y en algunos sectores desató inmediatamente impulsos de avanzar hacia una revolución efectiva, llegando hasta la formación de un Comité Tripartito Revolucionario integrado por estudiantes, obreros y maestros, que proclamaba la necesidad de cambios revolucionarios en Bolivia, la colusión de la dirección del PIR con los núcleos activos de la vieja "rosca" oligárquica, permitió el regreso al poder de los representantes de los "barones" del estaño, socios de la dominación imperialista a través de la disolución de ese Comité y su remplazo por una Junta Provisional encabezada por el presidente de la Corte Suprema, la cual disolvió inmediatamente las milicias populares que habían surgido.

La Junta Provisional de Gobierno llamó a elecciones en enero de 1947, y en ellas triunfó Enrique Hertzog, representante de los "barones" del estaño, integrando después en su gabinete a miembros del PIR. La cartera de Trabajo fue encargada nada menos que a Alfredo Mendizábal, militante comunista del PIR, que había sido delegado boliviano a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana en 1929, en Buenos Aires.

La caída de Villarroel fue seguida por una furiosa lucha político-social, marcada por el rápido ascenso de las masas obreras, campesinas y de las capas medias. En Noviembre de 1946, se reúne el Tercer Congreso Minero en la localidad de Pulacayo y aprueba un programa político revolucionario, propuesto por los representantes trotskistas en el famoso documento conocido como las "Tesis de Pulacayo" y cuyo autor principal habría sido Guillermo Lora. Los puntos centrales de ese programa plantean, con notable precisión, las bases democrático-antimperialistas y el desbloqueo socialista de la posible revolución boliviana. De un lado, por la objetiva necesidad de llevar a cabo la remoción de las bases económico-sociales y políticas del poder oligárquico imperialista en crisis, y de otro lado por la dirección proletaria del proceso, para garantizar que esas tareas no sean guillotizadas. La necesidad de la independencia política del proletariado revolucionario para conquistar esa di-



rección y oponerse a toda conciliación de clases. La ocupación y control obrero de las minas. El armamento de los trabajadores y la formación de milicias obrero-campesinas. La expropiación de las tierras de los gamonales sin pago. La unidad e independencia sindical de obreros y campesinos, como tarea de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y como clave de la revolución futura.

El reducido proletariado minero de un país atrasado, se alzaba en Pulacayo, al aprobar semejante programa, como la punta más avanzada del proletariado latinoamericano. Armado políticamente con un programa revolucionario, sería capaz en adelante de disputar la dirección de las masas explotadas con la pequeña burguesía democrático-nacionalista y, a pesar de sus frustraciones, impedir hasta ahora la consolidación y la legitimación del poder burgués.

En ese congreso participaron representantes de todas las tendencias políticas y principalmente los del MNR, con Juan Lechín Oquendo a la cabeza, y los del POR. El hecho de que en un congreso sindical se llegara a aprobar un programa político revolucionario, pone de relieve el nivel de desarrollo político del proletariado minero boliviano, así como la sin duda decisiva influencia que había logrado allí el POR, autor de ese programa, que a diferencia de todos los demás grupos trotskistas latinoamericanos había conseguido, entonces, descubrir las especificidades y las necesidades objetivas del movimiento de las masas trabajadoras de su país, en lugar de entraparse en una prédica generalmente doctrinaria como en todos los demás países.

En los seis años siguientes, la agitación y la movilización de las clases explotadas y medias se desarrolló rápidamente, chocando contra la represión del gobierno Hertzog-PIR desde el comienzo, y llevando a las masas a una pronta desilusión con la conducta del PIR cuyos ministros colaboraban en la represión gubernamental. Esa decepción de las masas implicaba al stalinismo, encubierto en el PIR, y a cuyas filas pertenecían los principales ministros.

Bajo la represión, los militantes del MNR aumentaron su presencia en los sindicatos mineros y fabriles y ganaron a la amplia mayoría de las capas medias. Paralelamente el POR

aumentó su influencia entre los obreros mismos y en importantes núcleos de intelectuales. Ambos partidos eran combatidos profundamente por el gobierno y fueron forzados a actuar en una suerte de frente único en la oposición. Eso explica por qué en la etapa siguiente, ambos emergen en la dirección del movimiento revolucionario de las masas, disputando la hegemonía y por tanto el carácter y las perspectivas estratégicas de la revolución.

Durante 1948 y 1949 los conflictos sociales fueron agudizándose ininterrumpidamente, y la represión del gobierno fue haciéndose más brutal, especialmente después del cambio de Hertzog a Uriolagoitia en la presidencia. El MNR intentó aprovechar esas condiciones para llevar a cabo un nuevo intento de putsch civil-militar en 1949 y tras la derrota de ese golpe, la represión militar se abatió con extrema ferocidad sobre los trabajadores fabriles de La Paz y los mineros de Siglo XX, asesinando a casi un centenar de obreros y sus familiares.

Tales hechos generalizaron el descontento popular y la profundización del enfrentamiento político y abrieron una etapa de crisis revolucionaria en el país, que se inicia con la huelga general de 1950 y culmina con la victoriosa insurrección revolucionaria de las masas en abril de 1952 y la destrucción total del Estado Oligárquico y de sus bases sociales.

En esa corta etapa, los obreros afirmaron su conciencia política y su lugar dirigente en el movimiento de masas, como se expresó en los congresos de fabriles y mineros en 1950; se extendió el movimiento de sindicalización campesina, especialmente en el área de Cochabamba. Y se radicalizaron los sectores medios urbanos, empujando al MNR a adoptar un lenguaje político marxizante, proclamándose sostenedores de las Tesis de Pulacayo, todo lo cual facilitó sin duda su crecimiento político en todos los sectores. Del mismo modo, los grupos comunistas que venían actuando dentro del PIR se vieron obligados, por el total desprestigio de ese partido dada su conducta cómplice con el gobierno de Hertzog en la represión obrera y el ataque al "trotskismo-bolchevismo" —como ellos decían en el PIR— a organizar el Partido Comunista Boliviano, que en las nuevas circunstancias varió su línea pasando al apoyo del MNR.

El gobierno de Mamerto Uriolagoitia ensayó desviar el creciente movimiento revolucionario de las masas, llamando a elecciones generales en 1951. Estas fueron ganadas por Paz Estensoro. Uriolagoitia fraguó un operativo de traspaso del gobierno al General Ballivián, que el pueblo boliviano llamó

1952: DEL PUTSCH A LA REVOLUCIÓN SOCIAL

Es bien conocido el hecho de que frente a la anulación de las elecciones, el MNR trató de responder organizando de nuevo un putsch civil-militar. Esta vez con la colaboración del General Antonio Selemé. Ministro de Gobierno de la Junta Militar, quien juró lealtad al MNR a cambio de la Presidencia de la República si el operativo era exitoso.

DemostRANDO reiteradamente su naturaleza política básica, como movimiento dirigido por capas medias antioligárquicas pero no antiburguesas, y nacionalista pero no antimperalista, el MNR estaba interesado en llegar al poder, pero estaba igualmente interesado en impedir el movimiento independiente de las masas, aunque éstas estuvieran bajo su influencia y lo apoyaran como lo apoyaban sin duda en la agitación de protesta por la anulación de las elecciones. Y por supuesto el MNR en lo que menos estaba interesado era en la destrucción de la fuerza armada. Por el contrario, el acuerdo con el General Selemé

y después el Acta de Laja, mientras las masas combatían, revelan inequívocamente que el MNR se esforzó hasta lo último, inclusive cuando ya no era viable, en preservar las fuerzas armadas del Estado oligárquico.

Sin embargo, de su lado los trabajadores bolivianos ya en activo proceso de agitación, de movilización y de organización durante todo el período, difícilmente podían ser simplemente puestos de lado en el enfrentamiento. Por encima de todo, cuando el proletariado había ya conquistado, con el programa de Pulacayo, una dirección y una perspectiva revolucionarias que el propio MNR, bajo las condiciones de la agitación en las bases no había podido ni rechazar ni sustituir, y que inclusive se vio forzado a defender y a asumir, a través de Juan Lechín, durante un tiempo, contra los ataques de la coalición "rusquera" con el PIR desde 1946 hasta 1950.

Por eso, cuando las acciones putschistas se iniciaron en la mañana del 9 de abril de 1952, los obreros fabriles de la Paz y los mineros de Oruro y de Milluni, decidieron por su propia cuenta y bajo su propia dirección, intervenir contra los militares en quienes veían, sin duda, la encarnación misma de los abusos políticos y de la explotación. Rebasando todos los límites y previsiones del operativo putschista los obreros no solamente derrotaron sino destruyeron las fuerzas armadas bolivianas.

La destrucción total de la fuerza armada, cuyo armamento pasó en su mayor parte a manos de los obreros, alteró de golpe las condiciones y las perspectivas del proceso: la intervención directa de las masas, transformaba un putsch pequeño burgués en una revolución social, permitiendo a la clase obrera y en particular a su dirección revolucionaria disputar con las capas medias democrático-nacionalistas la hegemonía del liderazgo del conjunto del movimiento de las masas, en la lucha por la definición de las perspectivas de profundización o de contención del proceso revolucionario.

En Bolivia, de ese modo concluía, con su destrucción, la larga crisis del poder oligárquico-imperialista y se establecía un nuevo punto de partida para la revolución boliviana. En América Latina en su conjunto, ese día comenzaba, también, la más profunda revolución social de toda su historia previa, y se abría un nuevo ciclo revolucionario en cuyo transcurso los factores y las fuerzas de la "revolución antioligárquico-nacionalista" irían quedando cada vez más claramente subordinadas a las de la revolución socialista, porque en adelante aquellas sólo podrían culminar dentro de ésta. No otro es, sin duda, el significado de la secuencia que va desde ese 9 de Abril de 1952 en Bolivia, pasando por la derrota, y no por acaso, de la experiencia de Guatemala en 1954, hasta la revolución cubana en 1959, que iniciada precisamente como una revolución democrático-nacionalista, pudo culminar victoriosamente y consolidarse solamente como revolución socialista.

A partir de entonces, revolución y contrarrevolución no podrán enfrentarse, en nuestro continente, sino asumiendo en lo concreto el antagonismo entre revolución socialista y contrarrevolución burguesa, vistiéndola ésta cada más franca y plenamente el pardo y sangriento ropaje fascista. Por ello y en especial por la conciencia que de estas experiencias ha ido ganando la burguesía internacional imperialista, sus socios dependientes, y sus fuerzas armadas, todo equívoco acerca de la naturaleza básica de este enfrentamiento y en consecuencia acerca de las perspectivas estratégicas del desenlace de procesos revolucionarios, cualesquiera que sean las condiciones particulares de su iniciación en nuestros países, inclusive en aquellos de mayor presencia de los problemas pendientes de la revolución democrático-nacionalista, oscurece tanto el problema de la necesidad de destrucción violenta de todo el aparato represivo y administrativo-político del Estado burgués, como el problema de la intervención directa de las masas, bajo la dirección del proletariado, y la conquista de su propio poder, y

lleva en la práctica al proceso a un callejón cuya salida real es la derrota sangrienta de las masas. Testimonio de lo primero son los casos de Brasil, Chile y de la propia Bolivia, así como los de Uruguay y Argentina de lo segundo, en contraste con la reciente experiencia nicaragüense y ojalá también la salvadoreña.

ENTRE LA REVOLUCION DEMOCRATICO-NACIONALISTA Y LA REVOLUCION SOCIALISTA.

Tras la destrucción de las fuerzas armadas, el movimiento obrero conquistó por un corto pero decisivo momento la dirección principal del conjunto del movimiento de masas.

De esa manera, la revolución boliviana de 1952 tendía a asumir en los hechos el carácter de un poder conquistado por una vasta alianza de obreros, campesinos y capas medias radicalizadas, bajo la dirección del proletariado revolucionario, a pesar de la indiscutible gravitación de la dirección de las capas medias sobre el movimiento. En otros términos, el movimiento de masas tendía a desarrollarse bajo una dirección cuya hegemonía pugnaban por ejercer el proletariado revolucionario y las capas medias democrático-nacionalistas, en ese momento radicalizadas al extremo bajo la presión del movimiento obrero y del conjunto de las masas, y dadas las circunstancias en esa pugna emergía una tendencia a la primacía del proletariado revolucionario.

La dirección del proletariado revolucionario se concentraba principalmente en los sindicatos mineros. Estos estaban centralizados en la poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), donde aunque era Juan Lechín, el principal dirigente minero del MNR, quien ejercía la presidencia, la influencia del POR en las bases y en la dirección era por todos reconocida, lo cual explica que fuera el Programa de Pulacayo la fuente principal de la orientación de la conducta política de los obreros mineros. Y esa Federación era claramente, como ha continuado siendo desde entonces, la dirección central del conjunto del proletariado boliviano y a través de ello, del conjunto del movimiento de masas de ese momento. En consecuencia, la disputa entre la clase obrera y las capas medias por la hegemonía del proceso revolucionario era, respectivamente, encabezada por el POR y el MNR. Este partido tenía sin duda una mayor presencia cuantitativa entre las masas campesinas y medias y una considerable presencia en el propio proletariado minero, mientras que el POR no había logrado, a pesar de su reconocida influencia ideológica y programática en esa etapa del proceso, un desarrollo orgánico equivalente.

Durante los primeros meses del proceso, se extendió el movimiento de sindicalización a todos los sectores, campesinos, obreros y capas medias, e inmediatamente se centralizó al organizarse la Confederación Obrera Boliviana (COB). Los sindicatos y la COB, emergieron como expresión del poder directo de las masas, porque no solamente operaban como organismos gremiales, sino como auténticos organismos de poder político, resolviendo los problemas pertinentes ya que todas las instituciones del previo Estado habían sido desmanteladas.

Ese poder político directo, cuya dirección era claramente ejercida desde la FSTMB, se apoyaba en las milicias obrero-campesinas que se organizaron inmediatamente, utilizando las armas conquistadas en la lucha y la destrucción del ejército profesional.

Fue ese poder directo el que permitió la rápida profundización del proceso revolucionario. Los campesinos iniciaron ma-

sivamente la expropiación sin pago de las tierras de los gamonales y su distribución entre la masa campesina. Y por su parte los obreros ocuparon las minas decretando su nacionalización sin pago y el control obrero de la producción.

Así, el conjunto del proceso no solamente se profundizaba y se desarrollaba en todos los frentes, sino que surgía por primera y hasta ahora única vez en la historia de las luchas de clases de América Latina la democracia directa de los explotados, organizados en un vasto frente bajo la dirección del proletariado revolucionario. Y todos esos pasos tendían al cumplimiento del programa revolucionario acordado por los obreros mineros en el Congreso de Pulacayo de 1946, con la inspiración de los militantes del POR boliviano.

De su lado, sin embargo, las capas medias democrático-nacionalistas dirigidas y organizadas en el MNR, se esforzaban por la reconstrucción del aparato institucional del nuevo Estado burgués, aunque no eran aún capaces de encuadrar en su propia perspectiva a todo el movimiento de las masas, y de impedir la profundización del proceso y la existencia del poder directo de los explotados. Por eso fueron forzados a consentir una fórmula política de transición que se institucionalizó como "Cogobierno del MNR y de la COB", durante la mayor parte de 1952.

Esa situación explicitaba formalmente la existencia de una dualidad de poderes, entre el Estado burgués en reconstitución y bajo la dirección del MNR, y el poder directo de los explotados expresado en la COB, cuya dirección se disputaban, cada vez más fuertemente andando los meses, el MNR y el POR.

Era evidente, durante esa etapa, que el gobierno del MNR era aún en la práctica prisionero del poder de la COB, pues los sindicatos y las milicias obrero-campesinas obedecían a ésta y no al nuevo Estado burgués. Estaban, objetivamente, dadas las condiciones para la resolución del conflicto de poder en favor de la COB, en favor de la democracia directa de los trabajadores bajo la conducción del proletariado revolucionario, y en consecuencia, la posibilidad del desarrollo del proceso en la ruta del socialismo revolucionario.

Nunca en América Latina había surgido con tanta nitidez esta necesaria combinación entre revolución democrático-nacionalista y revolución socialista; y nunca la experiencia histórica de constitución del poder directo de los explotados, aliados y organizados bajo la dirección del proletariado revolucionario, como resultado de la resolución revolucionaria de la crisis del Estado oligárquico-imperialista por acción directa de las masas, demostrando que en esta etapa de las luchas de clases en América Latina, ninguna revolución genuina, esto es, marcada por la intervención directa e independiente de las masas contando con un claro programa estratégico y un proletariado con elevada conciencia revolucionaria, podía dejar de desembocar, cualesquiera fuesen sus orígenes y cuestiones de partida, en la revolución socialista y en el establecimiento del poder directo, de la democracia directa de los explotados. Sin embargo, la objetiva dualidad de poderes y la ventaja del proletariado en esa relación durante los primeros meses no fue percibido ni reconocido por ningún partido revolucionario y mucho menos agitado el poder de la COB.

Indudablemente, la existencia de un proletariado con tan alta conciencia revolucionaria y de un programa estratégico que permitía a los trabajadores orientar su labor adoptando medidas derivadas de ese programa, se debían principalmente a la acción de los militantes del POR boliviano, organización trotskista ligada a la Cuarta Internacional entonces. Y ese es un mérito histórico que no se puede dejar de reconocer y que de hecho nadie en Bolivia, por lo menos, ha dejado de recono-



La derrota del proletariado revolucionario en favor de la pequeña burguesía democrática en el proceso boliviano, es decir, de la revolución socialista en favor de la "revolución nacional", no solamente significó la contención gradual y la distorsión y encallamiento del proceso mismo, sino también su desemboque final en el túnel sangriento del genocidio del proletariado bajo una dictadura militar, como en todos los demás casos de América Latina, después de Bolivia.



La responsabilidad de la dirección política del proletariado revolucionario sobre el movimiento de masas en particular en su disputa con las capas medias por la definición de la dualidad de poderes en favor de la democracia socialista, recae pues principalmente en el POR.

En esa tarea, el POR tropezaba sin duda con dos grandes dificultades objetivas. Primero, la reducida magnitud de su militancia organizada frente a la gran masa del MNR. Segundo, la reducción numérica del propio proletariado como clase, y especialmente del proletariado minero, la vanguardia de la clase, en una formación social de base social abrumadoramente campesina, sobre todo, y pequeño burguesa, secundariamente.

Y, de otro lado, en el plano internacional, la hegemonía todopoderosa del imperialismo norteamericano sobre todo el mundo capitalista apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, se ejercía sin fisuras y sin ninguna contestación, de ningún grupo burgués, a diferencia de hoy día. Mientras tanto, Rusia y los países de Europa del Este bajo su dominio, estaban aún replegados en la consolidación de su reconstrucción interna, en aras de lo cual habían convertido a todo el movimiento comunista internacional en un factor dedicado casi exclusivamente, entonces, a la defensa de esa política llamada "pro paz" y que se traducía en la práctica en América Latina en la base de la posterior "coexistencia pacífica".

Esa situación internacional permitía al imperialismo norteamericano un margen muy grande de maniobra para bloquear, incluidos los medios de intervención directa, los movimientos revolucionarios nacionales que amenazaban convertirse en revoluciones socialistas. Recuérdese que en esos años fue derrotado el movimiento nacionalista de Mossadegh en Irán, permitiendo la vuelta de la sanguiñaria dictadura del Sha, y más tarde el proceso reformista de Guatemala bajo Arbenz, con la invasión de Castillo Armas en 1954.

Todo eso ayuda, sin duda a explicar los problemas con que tropezaba la afirmación del poder revolucionario de los trabajadores bolivianos, contra el intento de restablecer el Estado burgués, sobre nuevas bases, que desarrollaba el MNR. No obstante, nada de eso puede explicar, y mucho menos justificar, el hecho de que fuera precisamente el POR boliviano, inspirador del Programa de Pulacayo, el que defeccionó abiertamente en su responsabilidad de principal dirigente político del proletariado boliviano, en la hora decisiva.

Porque fue, el POR el que contribuyó decisivamente a alimentar la confusión de las masas y finalmente a la total pérdida de una dirección política revolucionaria, justamente en el momento en que ella era absolutamente indispensable para dirigir la lucha planteada. En efecto, el POR se dividió pronto en tres pedazos. La mayoría, incluidos algunos de sus intelectuales y cuadros obreros más importantes, decidió pasarse al MNR aduciendo que la revolución boliviana era democrático-burguesa y que era necesario apoyar a la pequeña burguesía democrática en el gobierno. Ernesto Ayala Mercado, Erwin Moller, Lidia Gueiler, Alvarez Plata, entre otros se incorporaron al MNR y pronto ocuparon puestos de importancia dentro del partido y en las instituciones del nuevo Estado. Curiosamente, nada menos que los trotskistas resultaban asumiendo una posición típicamente menchevique. Otra fracción, en acuerdo básico con esas posiciones, decidió, sin embargo, que era necesario preservar la independencia orgánica y se mantuvo fuera del MNR, aunque bajo la presión de Pablo acuñara a la inútil práctica del "entrismo" y en los hechos, por lo tanto, no pudiera diferenciarse. Finalmente una minoritaria fracción, liderada por Lora y en abierta pelea con la dirección de la Cuarta Internacional, quedó aislada e impotente, vacilante entre las opciones del debate. 'sí, en la hora decisiva, los trotskistas bolivianos en su gran mayoría y la propia dirección internacional de su organización, pusieron de manifiesto su inconsecuencia no solamente con sus propias y vocadas posiciones en el debate internacional, sino ante todo con las necesi-

sidades del proletariado boliviano, dejándolo librado a la confusión y forzado al repliegue político después de una corta resistencia para preservar las bases de su poder.

Esa inconsecuencia y la defección sucesiva, obedecieron en ese momento, como otras prácticas trotskistas han obedecido después en otros países bajo otras circunstancias, no solamente a una enteramente incorrecta evaluación de la coyuntura de las luchas de clases planteadas en Bolivia, sino también a un abandono explícito, teórico y práctico, de la defensa del poder directo de las organizaciones de las masas, en favor del poder de los partidos o, peor aún, de un solo partido (1).

Desde luego, si se trataba de la defensa del poder de la COB y de sus sindicatos de base, apoyados en las milicias obrero-campesinas, el POR sin duda podía contar con la adhesión de las masas bolivianas que han revelado a lo largo de treinta años, en 1952 y en la Asamblea Popular de 1971 como después en la reciente etapa, que su lealtad principal se debe a sus organizaciones de masas y no tanto a sus partidos políticos como tales y separados de esas organizaciones. En cambio si se trataba de competir con el MNR para lograr el gobierno propio del POR, las masas si bien adheridas al Programa de Pulacayo y a la influencia teórica del POR, no se identificaban y no tenía por qué hacerlo, con el trotskismo como tendencia política diferenciada, ni con el POR como partido y más bien se identificaban con el MNR, como el propio Lora reconoce, aunque convencidas de que sus conquistas se hacían a través de sus organizaciones propias de poder, los sindicatos y las milicias.

En ese terreno, pues, la competencia entre el MNR y el POR favorecía totalmente al primero y fue sobre esa base que la mayoría del POR decidió pasarse a ese partido, unos haciendo "entrismo" y los otros más desvergonzadamente. La idea de hacer entre ellos era, no sorprendentemente, que el apoyo popular mayoritario al MNR, dada la orientación revolucionaria práctica de esas masas, empujaría al MNR a avanzar en la revolución y que era mejor estar dentro para hacer caminar ese proceso. Y no faltaron quienes sostenían, inclusive, la extraña tesis de que el MNR era el ocupante práctico del POR en la dirección proletaria y que en ese sentido era más o menos una prolongación de éste, (Lora, op. cit. pg. 36).

En resumen, la posibilidad abierta de consolidación del poder directo de los trabajadores y el desarrollo de la revolución en la dirección del socialismo, fue derrotada por ausencia de una dirección política organizada, o en otros términos de un partido político idóneo, ya que el POR que era el único candidato a esa dirección defeccionó en toda la línea dejando vencedor pleno del campo al MNR, y así a la hegemonía total de las capas medias en la conducción del movimiento de masas.

Antes de fin de año de 1952, el MNR era en realidad el único partido dirigente de la COB y su dominio político en los sindicatos mineros y en particular entre el campesinado se consolidó sin dificultad. La fórmula de "cogobierno MNR-COB", aún subsistente formalmente dejaba en la práctica de tener todo significado real.

Del mismo modo, pues, que no se puede regatear al POR la decisiva contribución a la educación inicial del proletariado, revolucionario boliviano y a su participación central en la profundización de la revolución de abril del 52, base de las conquistas democráticas de las masas, tampoco se le puede ahorrar el indispensable reconocimiento de su responsabilidad en la derrota política del proletariado boliviano frente a la pequeña burguesía democrática, en ese momento, y en las reiteradas frustraciones de las luchas de los explotados de ese país que de esos hechos se han derivado hasta hoy.

(1) Véase en Guillermo Lora: *La Revolución Boliviana*, La Paz 1963, la defensa del poder del POR y no de la COB. Especialmente págs. 26 y 404.

DOMINIO DEL MNR Y REARTICULACIÓN DE LA ALIANZA IMPERIALISTA EN BOLIVIA

Después de la defección del POR, y ya ganada la hegemonía de la conducción política de las masas, el MNR, ahora engrosado con la incorporación de algunos de los más prestigiosos líderes trotskistas, se dedicó al cumplimiento de tres líneas de tareas básicas: 1) Consolidar el aislamiento de la vanguardia revolucionaria de la clase obrera, romper la alianza obrero-campesina sustituyéndola con otra entre la pequeña burguesía y el campesino, convertir a la COB y a los sindicatos de base en instrumentos del partido en el poder, y liquidar las milicias obrero-campesinas conservando apenas durante un cierto tiempo algunos grupos campesinos armados bajo el total control del gobierno como instrumentos de represión contra la ya debilitada oposición revolucionaria. 2) La restauración institucional del Estado, burgués tanto en su aparato administrativo y político como y especialmente en su aparato de represión, reorganizando el ejército profesional mientras se desmantelaban las milicias obrero-campesinas.

La primera serie de tareas fue llevada a cabo por medio del control estatal de las conquistas básicas de las masas en los primeros meses de la revolución, de manera que el MNR pudiera aparecer como el paternal dador de la institucionalización y legalización de esas conquistas, ya que mientras no estuviera reconstruido el ejército profesional y todo el aparato del Estado burgués, no hubiera sido posible ni contener ni desmantelar esas conquistas.

En primer término, el MNR no pudo dejar de proseguir con la expropiación y la entrega de las tierras a los campesinos. Pero esa labor le permitió aparecer frente a las masas campesinas como el benefactor de ellas, desde que era el gobierno del MNR el que entregaba los títulos de propiedad de esas tierras. De ese modo, los sindicatos campesinos, si bien no podían desaparecer, fueron pasados al control del partido y en adelante su acción fue vaciada de su contenido político previo como órgano de poder para convertirse en un instrumento del partido y del gobierno.

En segundo lugar, el MNR no pudo dar marcha atrás la nacionalización de la minería del estaño, ocupada por los obreros desde los primeros meses, ni eliminar el control obrero ya instalado. Pero esa nacionalización fue institucionalizada por medio de la creación de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL), como una empresa del nuevo Estado burgués y en consecuencia como una entidad burocrática. Y el control obrero fue también vaciado de su previo contenido revolucionario, por el simple expediente de nombrar a obreros mineros como representantes de la clase en el aparato burocrático de la COMIBOL, pero separados del control real de sus bases y en consecuencia arrastrados sin remedio a la corrupción burocrática y al aburguesamiento posterior.

La ausencia de una dirección revolucionaria efectiva en el proletariado, dejó limpio el terreno para que el MNR pudiera hacer aparecer medidas que eran ya parte de la institucionalización y recuperación burguesa de las conquistas previas de las masas, como medidas de profundización de la revolución, y en consecuencia al propio MNR y a su liderazgo como los genuinos representantes de los impulsos revolucionarios de las masas. Es decir, inclusive en el terreno ideológico, el MNR tuvo cumplido éxito en imponer sobre las masas una versión pequeña burguesa de la revolución, que terminó por eso en adelante caracterizada simplemente como una "revolución nacional" desde sus orígenes y no solamente en su nueva etapa.

“

Esa lucha de resistencia no puede pasar por fuera del poder aglutinador de la dirección de las primeras. Pero no puede ser contenida dentro de los límites exclusivos de la democracia burguesa, a la que apuntan esos sectores. Y del otro lado, sin apoyarse en las necesidades democrático-nacionalistas del movimiento de masas y sin apoyarlas, la lucha por la culminación socialista de la lucha democrática, condición para impedir una nueva etapa de derrotas, no puede ser impulsada.

”

Y en efecto, la revolución que fue la obra de una alianza de clases dominadas y medias, con una dirección inicialmente ganada por el proletariado revolucionario y que pudo por eso profundizarse en sus primeros meses, terminó convirtiéndose, tras la derrota de la vanguardia revolucionaria minera, en un proceso de consolidación bajo la plena hegemonía de la pequeña burguesía democrática y más tarde institucionalizada como parte del nuevo poder burgués emergente sobre esas bases. La pugna por la definición de la revolución entre los límites de una "revolución nacional" de contenido pequeño burgués al comienzo y burgués en adelante, y las perspectivas de una revolución socialista, se había resultado en favor de la primera. 3) Dueño del campo, el MNR no tardó en reconstruir la alianza imperialista en Bolivia, bajo el dominio de la todopoderosa burguesía norteamericana y de su Estado, como marco y como base para el relanzamiento del proceso capitalista dependiente en el país.

Ese proceso consistió en el uso de la renta minera para financiar la formación de nuevas capas burguesas, primero en la agricultura de la región oriental del país, y más tarde de la mediana minería privada que poco tiempo después se convertiría como hasta hoy en el único sector minero de efectivo crecimiento, en la producción de antimonio, y wolfram, principalmente. Y, desde luego, en el proceso de usar las rentas estatales para la corrupción de dirigentes sindicales y políticos que se fueron convirtiendo en parte de la nueva burguesía boliviana.

na y para la iniciación del pago a los ex "barones" del estaño, los Patiño, Aramayo y Hochschild, por las empresas mineras expropiadas por los trabajadores.

Todo ello se expresó necesariamente también en el curso de la política internacional de los primeros gobiernos del MNR (Paz Estensoro y Siles Suazo), al plegarse primero a la represión imperialista contra el proceso reformista del gobierno de Arbenz en Guatemala y la sangrienta invasión de Castillo Annas en 1954, y más tarde a la expulsión de Cuba del seno de la OEA en Costa Rica, en 1961.

El proceso revolucionario terminaba, pues, encuadrado y contenido en los marcos de una política burguesa proimperialista, que al mismo tiempo que restauraba el Estado burgués represivo y dependiente y usaba los excedentes de la producción de obreros y campesinos para ampliar la clase burguesa y la explotación de los trabajadores, bloqueaba inevitablemente las posibilidades de desarrollo económico del país, inclusive en un sentido puramente capitalista, y la capacidad de independencia nacional frente a la dominación imperialista. La "revolución democrático-nacional" se revelaba, así, sin apelación posible, como incapaz de desarrollarse en la dirección efectivamente democrática y nacionalista, si no se transformaba en revolución socialista, como democracia directa de los trabajadores y como destrucción de la explotación capitalista, base de la dominación imperialista.

Entre fines de 1952 y 1964, en los dos períodos iniciales del gobierno del MNR todo ese proceso de contención y encuadramiento imperialista de la "revolución nacional" había quedado cumplido, y en particular la restauración del nuevo Estado burgués y de sus fuerzas armadas, éstas por supuesto bajo la dirección del Pentágono y de sus agentes y créditos militares.

No en vano, sin embargo, las masas bolivianas habían sido las protagonistas reales de las etapas realmente revolucionarias del proceso. La descapitalización de las minas, la corrupción burocrática, la transferencia de la renta minera a la nueva burguesía agraria y a los ex-dueños de las minas y de las tierras y a las fuerzas armadas, implicaban inevitablemente la creciente disminución del nivel material de vida de los trabajadores, por la inflación y la escasez de las subsistencias, así como la gradual expropiación y distorsión de las conquistas democráticas de las masas, especialmente de la clase obrera.

Aunque sin dirección consistente y consecuente, la vanguardia de los obreros mineros y fabriles acudía a sus bases en una lucha de resistencia contra esa política de la nueva burguesía en el poder. Aunque el gobierno podía contar con el campesinado, rota la alianza obrero-campesina, y sus grupos armados para aislar y reprimir a los obreros y al semiproletariado urbano, conforme fue reorganizándose el ejército profesional la represión fue cada vez más realizada por éste, produciéndose numerosas masacres y crímenes políticos contra la oposición.

Ese enfrentamiento entre el proletariado y el semiproletariado urbano y minero y la represión gubernamental del MNR, no podía dejar indemnes las bases políticas de ese partido entre las masas, ni dejar de repercutir en el seno de su propia dirección. A eso se añadían las disputas por rivalidades personales en las cuotas de usufructo del botín y del poder.

Bajo la presión de las masas, los sectores del MNR más ligados a ellas por su previo origen político y por su lugar en el aparato sindical y político comenzaron a diferenciarse como una tendencia al interior del partido, con una orientación izquierdista y definiéndose como el ala izquierda del MNR. Lechín y la mayoría de los ex-trotskistas encabezaban ese sector. Y de otro lado, los sectores más francamente proimperialistas y reaccionarios, emergieron también como otra tendencia, acudidos principalmente por Walter Guevara Arce.

La fracción dirigida por Paz Estensoro y Siles Suazo, quedaba como el centro de ese espectro de descomposición política y orgánica del MNR. Las luchas internas se fueron encañando con las pugnas por el turno en la candidatura oficial a la Presidencia de la República, y el antes compacto y poderoso MNR se dividió finalmente en tres agrupaciones independientes: el MNR de Paz y Siles; el MNR Auténtico, de Walter Guevara; y el Partido de la Izquierda Revolucionaria Nacionalista, con Lechín a la cabeza y Erwin Moller y Lidia Cuallier (ambos ex-trotskistas) con él, que se constituyó después del golpe de Barrientos.

Los desacuerdos electorales y políticos de 1964, dentro del MNR y la renovada lucha de las masas por sus reivindicaciones económicas y políticas, abrieron el campo para un nuevo golpe militar, esta vez del nuevo ejército, encabezado por el General Barrientos, que provenía de las filas del propio partido, con la total protección del imperialismo norteamericano.

Las conquistas democráticas de las masas, en el terreno sindical y político, que venían siendo castradas por los gobiernos de Paz Estensoro y Siles Suazo bajo el aumento de la represión, fueron definitivamente eliminadas bajo la dictadura militar de Barrientos, apoyado en la nueva burguesía local y por una buena parte del campesinado, a través del "Pacto Militar-Campesino" que la dictadura organizó con los corruptos caciques locales engendrados por los gobiernos anteriores del MNR.

La represión de la dictadura de Barrientos sobre el proletariado minero sólo puede calificarse de bestial. Fue una serie feroz de masacres de mineros en Mayo y Setiembre de 1965, y después la más inhumana de la historia boliviana, la espantosa carnicería de la infanta "Noche de San Juan", en 1967, cuando las tropas invadieron las poblaciones mineras asesinando a cientos de pobladores de todas las edades y sexos mientras festejaban la tradicional fiesta de San Juan, además del asesinato de César Lora, el más importante dirigente minero de ese momento, y miembro del POR. Era la obra del ejército reconstruido por el MNR, encabezado por uno de sus hijos.

La derrota del proletariado revolucionario en favor de la pequeña burguesía democrática en el proceso boliviano, es decir, de la revolución socialista en favor de la "revolución nacional", no solamente significó la contención gradual y la distorsión y encallamiento del proceso mismo, sino también su desemboque final en el túnel sangriento del genocidio del proletariado bajo una dictadura militar, como en todos los demás casos de América Latina, después de Bolivia.

DE LA DERROTA DE LAS GUERRILLAS DEL CHE A LA ASAMBLEA POPULAR

En medio de ese nuevo calvario de los trabajadores bolivianos, una luz se encendió súbitamente en el corazón de los revolucionarios latinoamericanos cuando se supo que el Che Guevara dirigía un destacamento guerrillero en las selvas bolivianas. Pero esa luz se extinguió como surgió, súbitamente, para quedar en el recuerdo del pantheon heroico de la larga lucha revolucionaria de nuestros pueblos.

Sobre ese momento de heroísmo, dichas ya por muchos las cosas fundamentales, no es la ocasión de detenemos. Solamente es necesario reiterar que el resplandor del sacrificio de tan ilustre héroe revolucionario no apareció, como es claro ahora para todos, ni en el tiempo ni en el escenario adecuados para iluminarlos plenamente.

Sin embargo, contribuyó a precipitar la crisis política del régimen barrientista, galvanizando y radicalizando a nuevas capas de la juventud de las capas medias y fortaleciendo la combatividad de los trabajadores, y de otro lado ensanchando las brechas políticas dentro de las fuerzas armadas del país. Pudo ser como culminación de la secuela política iniciada con asesinato del Che, en 1967, que se produjo el posterior asesinato del propio Barrientos y la ascensión del General Ovando al gobierno, en setiembre de 1969, tras el corto interinato de Siles Salinas.

El nuevo régimen militar, enfrentado a la resistencia cada vez más amplia de los trabajadores y de las capas medias jóvenes contra la dictadura barrientista y en un contexto político internacional que contenía el ascenso de las masas en Chile, Argentina, Uruguay y el reformismo corporativista del régimen velasquista en el Perú, se vio forzado a iniciar una política de apertura democrática para amortiguar los conflictos.

Se restablecieron las libertades sindicales, permitiendo a los trabajadores reorganizarse rápidamente, y se inició una tímida política de nacionalizaciones parciales propugnadas por ministros de esa orientación, y el debate sobre los problemas del desarrollo nacional. La nacionalización de la GULF OIL, bajo el Ministerio de Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue indudablemente la medida más importante en ese campo.

El restablecimiento de la vida sindical y política del país, fue usado rápidamente a fondo por los trabajadores de todos los sectores, incluyendo ahora a los nuevos contingentes del proletariado y semiproletariado agrario de la región oriental de Santa Cruz, organizados en la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO). Inmediatamente se organizó el Congreso de la Federación Minera, el corazón y el cerebro del proletariado boliviano, en marzo de 1970, aprobando el nuevo programa político de los trabajadores, contenido en las Tesis de Siglo XX presentadas por Filemón Escobar, representante de la base de Siglo XX y militante del POR. Ese documento, aprobado por unanimidad por delegados procedentes de todas las bases mineras y miembros de todas las organizaciones políticas con presencia en esas bases, incluido el MNR, sostenía en su parte central que la experiencia de la "revolución nacional" no estaba solamente agotada sino llevaba a la profundización de la dependencia y del subdesarrollo y así a una mayor explotación y represión de las masas, y que en consecuencia en la nueva etapa de la lucha, la orientación del movimiento obrero y de todos los trabajadores no podía ser sino la revolución socialista.

Ese programa, con modificaciones secundarias, fue sucesivamente aprobado por los congresos de los fabriles, de los ferroviarios, de la prensa, etc., y finalmente en el congreso nacional de la COB.

Después de la larga y frustrante experiencia de la "revolución nacional" y las sangrientas represiones del MNR y de la dictadura barrientista, el proletariado boliviano emergía de nuevo, unido de una excepcional, lúcida y coherente conciencia revolucionaria, y se enderezaba otra vez a la búsqueda de la revolución socialista. Las organizaciones sindicales de los obreros, en particular de los mineros, volvían a mostrar que su carácter no se agota en la representación gremial, en el caso boliviano y a lo largo de toda su historia, sino que se exigen en representaciones de clase y tienden a desarrollarse como órganos de dirección y de poder político directo. Y aún, se reiteraba una tradición jamás desmentida en la historia del proletariado boliviano según la cual la lealtad primordial y básica de los obreros no se dirige a sus organizaciones partidarias, sino a sus organizaciones sindicales, permitiendo explicarse el hecho, en apariencia insólito, de que militantes de muy diversas tendencias ideológicas pudieran producir el unánime consenso en torno de un programa revolucionario en el seno de una reunión sindical, mientras en el seno de sus organizaciones par-

tidarias podían diversificarse en sus respectivas tendencias. Eso explica también el hecho paradójico de que un partido político pequeño y sin cesar castigado con el asesinato de sus mejores cuadros obreros, como el POR, de reducida militancia y de precaria organización a pesar de sus defecciones previas en momentos cruciales de las etapas anteriores, pudiera aparecer como el portavoz de la actitud y de la conciencia política principal de las bases mineras.

El 10 de Mayo de ese año, desfilaron los trabajadores por las calles de La Paz. Estaban todos. Desde las representaciones obreras fabriles y mineras, del campesinado que gradualmente volvía a la lucha junto a los obreros; de los artesanos, de los comerciantes pequeños de los mercados y del semiproletariado. Salían de todos los rincones pobres de la ciudad. De las casas obreras prendidas de los barrancos de barro y desde los tugurios que rodean a los mercados populares, desde las hierbas. Con su traje de domingo, los varones; con sus hijos a cuestas las mujeres. Con su decisión de combatir, expuesta en sus caras y en sus carteles, por la revolución socialista y por el poder directo de los explotados. Sobrevivientes de incontables masacres y vencedores de muchas frustraciones, volvían al camino terrible de la lucha revolucionaria más profunda e intensa del continente.

Ese nuevo despliegue político de las masas y la clara decisión del proletariado, no podía ser tolerado por la miserablemente débil burguesía boliviana ni por sus fuerzas armadas. Particularmente porque el gobierno de Obando, a pesar de su apertura democrática y de sus tímidas medidas nacionalistas, no lograba de modo alguno ganar legitimidad y apoyo popular. Por el contrario, los conflictos políticos y sociales se agudizaban.

En junio de ese año, un grupo de jóvenes universitarios se aventura en un nuevo intento guerrillero, totalmente aislado y desprovisto de todo apoyo popular organizado, y es liquidado en Teoponte. El impacto de esos hechos repercute en la población, produciendo manifestaciones populares demandando la entrega de los cuerpos de los guerrilleros. El gobierno contesta expulsando a los sacerdotes del movimiento llamado del "Tercer Mundo", en setiembre.

En octubre, los obreros y campesinos organizados en la UCAPO en la región de Santa Cruz, invaden y ocupan un ingenio importante. Mientras tanto los obreros fabriles y mineros, presionan por mejoras salariales inmediatas, para recuperarse del largo congelamiento de sus salarios desde Barrientos, y por la reposición de sus despedidos. En ese mismo mes de Octubre, un intento golpista del General Miranda, militar ultraderechista, es contenido por una movilización popular, encabezada por los obreros de La Paz, de la cual resulta la formación de un Comando Político de la Clase Obrera y del Pueblo, formado por sindicatos y partidos de izquierda.

En Enero de 1971 un nuevo intento de golpe decide a Obando a abandonar el gobierno, pero una insurrección popular dirigida por el Comando Político de los trabajadores enfrenta a los golpistas y con su apoyo el General Juan José Torres asume el gobierno.

Los trabajadores movilizados reclaman avanzar en la revolución socialista en imponentes manifestaciones, y en esas condiciones y a propuesta del POR dirigido por Lora el Comando Político se transforma en la Asamblea Popular de Bolivia, que inicia sus funciones en Febrero de 1971.

LA EXPERIENCIA Y DERROTA DE LA ASAMBLEA POPULAR.

La instalación de la Asamblea Popular, abre una nueva etapa revolucionaria cuya significación para las luchas de clases de Bolivia y de América Latina consiste, como la de 1952, en reponer en el primer plano de la práctica y del debate político de los trabajadores revolucionarios, las cuestiones del poder directo de los explotados como forma de la democracia directa de las masas, y de la relación entre "revolución democrático-nacionalista" y revolución socialista.

El movimiento de las masas trabajadores de Bolivia, durante esa coyuntura entre Enero y Agosto de 1971, se caracterizaba por ciertos rasgos muy marcados y en general reconocidos por los dirigentes sociales y políticos.

En primer término, por una mayor diversificación social de la masa trabajadora, producida por la presencia de sectores de proletariado y semiproletariado agrario en la región oriental de Santa Cruz, que aunque todavía reducidos estaban en activo proceso de movilización y organización contra los hacendados capitalistas de la zona, y centralizados en la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), bajo la dirección principal de fracciones pro-chinas agrupadas en el Partido Comunista de Bolivia (marxista-leninista); de otro lado, por una mayor presencia del semiproletariado urbano, especialmente en La Paz, debido a la expansión de actividades de comercio y servicios, lo que implicaba también una extensión de las capas de pequeña burguesía urbana, así como las actividades estatales y profesionales habían ampliado las capas medias profesionales y burocráticas, en gran parte provenientes de los rangos de la extinguida clase terrateniente señorial destruida con la reforma agraria de 1952 en adelante. Esos nuevos sectores sociales, concurrían al movimiento de masas, a través del movimiento estudiantil universitario, extremadamente radicalizado después del asesinato del Che y de la desastrosa aventura guerrillera de Teoponte; de agrupaciones salidas de las filas del MNR y que radicalizaban su postura y su lenguaje iniciándose en el marxismo; de núcleos de burocracia nacionalista-reformista, radicalizados en las circunstancias, desde el gobierno de Obando.

En segundo término, por una importante aunque minoritaria e incipiente diferenciación política en el campesinado, una parte del cual comenzaba a agitarse y a movilizarse independientemente del Pacto Militar-Campesino contrarrevolucionario, impuesto por Barrientos, y mantenido por Obando. Especialmente en el Altiplano, tales sectores se movilizaban y finalmente se organizaron en un congreso en Potosí, como Confederación Campesina Independiente, prestando su apoyo a la lucha de los demás trabajadores del país. La alianza obrero-campesina, tota bajo los gobiernos del MNR, comenzaba a caminar de nuevo aunque sobre bases aún precarias.

Tercero, por la recuperación definida de una conciencia revolucionaria clara en el proletariado, y en particular en los mineros, que les permitía dotarse de nuevo de un programa y de una perspectiva estratégica en las nuevas condiciones, como se demostraba en la aprobación unánime de las Tesis del Siglo XX en el Congreso de la Federación Minera y bajo su dirección en el posterior Congreso de la COB en 1970. A pesar de ello, claramente también, esa conciencia y la práctica política del proletariado no estaban, respaldadas por una organización política de vigor equivalente, ni había sido capaz de superar, como se veía en la Asamblea Popular, una propensión obrerista en las direcciones más avanzadas que llevaba a su aislamiento respecto de la inmensa masa mayoritaria del cam-

pesinado, expectante desde fuera y todavía inmerso en las nieblas del barriestismo.

Cuarto, el conjunto del movimiento de masas tenía una relación ambigua con los partidos políticos que se reclamaban de la representación de los intereses de los trabajadores. El movimiento de masas era fuerte y en gran medida independiente de los partidos políticos y al mismo tiempo influido por éstos, puesto que los dirigentes principales de cada uno de los sectores de trabajadores eran miembros de esos partidos y a la par se esforzaban por mantenerse ante todo leales a sus bases y eran sujetos de las presiones de ellas. En los debates de la Asamblea Popular no era en modo alguno infrecuente el enfrentamiento entre dirigentes de masas y dirigentes de sus propios partidos políticos, como era el caso por ejemplo de Simón Reyes, miembro del PCB (Pro-Moscú), y su principal dirigente minero, quien sostenía el carácter socialista de la revolución en curso frente a su partido que aún defendía (después de 1952) la "revolución antifederal, antioligárquica y antimperialista". O de Filemón Escobar, el principal dirigente minero del POR (Lora) y que pugnaba por una política más profunda y más vasta de alianzas frente al obrerismo de la dirección de su partido en ese momento.

El correlato de esa relación entre partidos y movimiento de masas, era, desde luego, la debilidad relativa de aquellos y su incapacidad para alcanzar la hegemonía de la dirección del movimiento y de la Asamblea Popular, ni siquiera formando bloques entre ellos, dada la heterogeneidad política de tales y la independencia de las bases de los trabajadores que solamente acataban las decisiones de sus organismos sindicales y de la Asamblea Popular como tal.

Políticamente era reconocida expresamente por todas las tendencias políticas e ideológicas, así como por todos los sectores sociales de trabajadores, la total primacía de la dirección del movimiento obrero organizado. Sin embargo, el aislamiento del grueso del campesinado, la vocación guerrillera de grupos de capas medias, que se mantuvieron fuera de la Asamblea Popular, la extensa presencia de representantes de las capas estudiantiles y profesionales radicalizadas, junto con la actitud indecisa de algunas corrientes políticas como la dirección del POR (Lora), llevaban a que en la práctica tal reconocimiento de la dirección proletaria se tradujera en una fluctuación entre una inclinación obrerista y una postura conciliadora con el nacionalismo pequeño burgués, que incluía al gobierno de Torres.

Con la instalación del gobierno de Torres en Enero y de la Asamblea Popular en el mes siguiente, se crea un marco político que sin duda permitía la actuación y posibilitaba el desarrollo de la Asamblea en una dirección revolucionaria más profunda.

La derrota del golpe derechista en Enero, por la insurrección popular divide a la fuerza armada boliviana. Y eso permite a una fracción de ella, encabezada por Torres, asumir el gobierno. Esa división se profundizó en los meses siguientes hasta poco antes del golpe de Banzer en Agosto de 1971. De una parte, están en escena minoritarios sectores nacionalista-reformistas radicalizados, concentrados en el famoso Batallón de los Colorados, bajo la jefatura del Mayor Rubén Sánchez, respaldados por corrientes centristas más o menos democráticas pero no organizadas ni claramente definidas. De la otra, los sectores burgueses proimperialistas, decididos a cortar el proceso revolucionario iniciado con un nuevo golpe, pero entre los cuales no había acuerdo durante los primeros meses de ese año, ni sobre la jefatura ni sobre la oportunidad precisa de la contrarrevolución. En esos meses se especulaba en Bolivia sobre la existencia de por lo menos cinco fracciones golpistas en el seno del ejército, que competían por ganar la adhesión del conjunto del ejército. Fue, sin duda, esa división

y mientras durara, lo que permitió la existencia de la Asamblea Popular.

Por su lado, la burguesía misma continuaba siendo en Bolivia, no obstante su relativa diversificación desde 1952, social y políticamente demasiado débil como para generar una amplia resistencia en la estructura social misma, distinta de la estructura militar y capaz de operar como dirección o como centro de poder político. Por ello, el despliegue del movimiento de masas y de la Asamblea Popular implicó el ostensible repliegue político de la aterrada y miserable burguesía local. Solamente la acción imperialista directa y las fuerzas armadas reaccionarias, por eso mismo, y como siempre en ese país, podían contrarrestar el movimiento revolucionario de los trabajadores.

El propio gobierno del General Torres, en esas condiciones, no podía tener fuerza propia real ni orientación política definida. Incorporando a su gobierno a numerosos representantes de las capas medias nacionalistas y reformistas, algunos de ellos muy radicalizados, estaba incapacitado de reorganizar o de ampliar sus bases dentro de las fuerzas armadas y solamente la división entre los golpistas permitía una sombra de autoridad del gobierno sobre el ejército. Por otro lado, en cambio podría haber buscado el apoyo y la legitimidad entre las masas. Pero ellas se habían organizado ya en la Asamblea Popular, y proclamaban la perspectiva socialista de la revolución, mientras el General Torres proclamaba la idea de una "revolución nacional" y condenaba el "extremismo" de los trabajadores, explícitamente. Con las masas y en particular con la Asamblea Popular, pues, las relaciones del gobierno de Torres eran, necesariamente ambiguas y contradictorias, fluctuando entre la apertura y el autoritarismo que no podía ejercer realmente, entre el nacionalismo de izquierda y la impotencia para hacerlo real ya que eso implicaba en los hechos ceder a las presiones revolucionarias de las masas.

Por fuera de esas bases sociales, no existía en Bolivia ninguna fracción burguesa apta para conciliar y transar con un régimen de ese tipo, por su extrema debilidad social y económica. Y las capas medias, bien que parcialmente ganadas al reformismo-nacionalista en un momento de gran presión social y política de las masas trabajadoras, no tenían ni amplitud ni densidad alguna como para servir de colchón de apoyo social y político de semejante régimen, como un terreno intermedio de maniobra que permitiera adueñarse, así solo fuera por un corto momento, del apoyo efectivo de algún amplio y fuerte sector de trabajadores. Tales grupos medios eran en la práctica, aunque forcejeando por la conciliación y no sin éxito a veces, prisioneros de la presión de las masas y de sus propias propensiones de pequeña burguesía reformista e inconsecuente. Esto es, enredados y políticamente impotentes.

Y, finalmente, el propio General Torres reveló que fuera de su confusa ideología nacionalista y reformista, carecía de cualquier proyecto político efectivo o de las condiciones de un caudillo capaz de decisiones rápidas y fuertes, atrapado entre su lealtad a la fuerza armada cuya oficialidad conspiraba abiertamente en su contra y contra la cual se negó en definitiva a actuar, y las presiones a que lo sometía el movimiento popular.

La Asamblea Popular, en ese contexto político-social, tenía en principio la posibilidad de desarrollarse como un efectivo órgano de poder directo de las masas, tal como era su propia pretensión ideológica oficial, impuesta por las más radicales de las corrientes en su seno contra las que propugnaban para ella solamente la calidad de parlamento popular fiscalizador y colaborador del gobierno militar de Torres. Esa imagen propia de órgano de poder de las masas y en consecuencia centro de uno de los focos de una dualidad de poderes frente al del gobierno, fue formalizada en los documentos centrales emanados de la Asamblea.

“

Y esa orientación a la par antiburguesa y antiburocrática del movimiento revolucionario del proletariado boliviano, no es y no ha sido simple o solamente un postulado ideológico de algunas minoritarias corrientes, sino por el contrario la tendencia práctica y actuante de las masas en todos los momentos más altos del desarrollo de sus movimientos revolucionarios.

”

Por su composición social, esa Asamblea era dominada por la presencia de la representación obrera, con delegados emanados de las bases sindicales en elecciones directas, en relación a las delegaciones de campesinos y de las capas medias igualmente originados en los organismos de base de tales sectores. Sobre un total de 218 delegados, 132 eran obreros, 23 campesinos y 52 de empleados, maestros, estudiantes y artesanos.

Por su composición política, formalmente participaban los partidos reconocidos en la Asamblea como revolucionarios, a razón de dos delegados por cada uno de ellos: PRIN, PCB, PCM-L POR (fracción Lora), PDCR Y MR Espartaco (posteriormente fusionado con el anterior y convertido en MIR). Quedaban fuera, el POR liderado por González Moscoso, el Partido Socialista liderado por Marcelo Quiroga que aún no había logrado legitimidad entre las organizaciones de la izquierda boliviana por el pasado político de Quiroga. Sin embargo, en la práctica, a través de las delegaciones sindicales de base, el MNR había logrado una importante presencia, estimada en 53 delegaciones, el PS con 13 y hasta la Falange Socialista Boliviana, organización fascista, contaba 8 delegados. Así la composición política real era la siguiente: MNR con 53 delegados; PRIN con 28 delegados; PCB con 26; PCM-L con 17; PS con 13; MIR con 13; POR con 8; FSB con 8 y además los delegados independientes sumados 52 en total.

Dada esa composición partidaria real, el peso mayoritario de la Asamblea estaba del lado de las tendencias nacionalista-reformistas (MNR, PRIN y PS), seguidas de las tendencias obreras burocráticas como el PCB. El POR (Lora) y las agrupaciones restantes eran claramente minoritarias. Sin embargo, en los debates y en las resoluciones, esa composición partidaria no podía reflejarse sistemáticamente por el hecho de que las delegaciones sindicales de bases respondían más a las presiones de éstas, con frecuencia en contra de sus direcciones partidarias formales, como en los casos de los delegados del MNR, PRIN y PCB. Pero, inevitablemente, el peso de las adhesiones partidarias formales no podía permitir tampoco definiciones políticas más nítidas y coherentes en las decisiones y en la conducta práctica de la Asamblea como tal.

De ese modo se dibujaron en el seno de la Asamblea tres corrientes básicas. Una de propensión oficialista, que a pesar de la declaración formal de independencia de la Asamblea y de su imagen propia de poder independiente de las masas, empujaba en la dirección de una conducta parlamentaria, de apoyo y de fiscalización de la acción del gobierno de Torres. En ese bloque participan el PRIN, el MNR y el PCB. Una corriente declarativamente radical y no oficialista, que presionaba por una total independencia de la Asamblea frente al gobierno y por la organización de las bases militares del poder popular, aunque en la práctica enfatizaban mucho más la presión por medidas nacionalistas radicales del gobierno, más que por acciones destinadas a dotar de instrumentos de poder real a la Asamblea, que permitieran imponer esas medidas. En ese grupo formaban el MIR (fusión de Espartaco, una escisión del MNR, y la juventud democristiana sobreviviente de la aventura de Teoponte), el PCM-L (Prochino) y parte de los delegados independientes. Entre ambas corrientes, el POR (Lora) diferenciado en corrientes que respondían cada una a esas tendencias contrapuestas, nadaba en una conducta contradictoria que por momentos lo hacía parte del bloque conciliador con el régimen, y por otros parte de las corrientes más radicales. Esa ambigüedad se manifestaba sobre todo en las declaraciones formales del POR, que apuntaban normalmente a la profundización del proceso y que en la práctica eran la base de la teoría implícita en las declaraciones y resoluciones formales de la Asamblea, y las conductas prácticas derivadas del juego de maniobras políticas.

Debido a esos factores, la Asamblea se fue desenvolviendo en toda la etapa como un fenómeno político muy contradictorio. De una parte era universalmente reconocida por to-

dos los trabajadores bolivianos como su órgano de expresión política, independiente del gobierno y opuesto a él, destinado a concentrar el poder global en sus manos. Y el debate entre las masas partiendo de ese supuesto, permitía claramente el desarrollo de la conciencia política del conjunto. Ideológicamente, pues, para la conciencia de las masas volvía a ponerse, en el primer plano la lucha por su poder directo, por la democracia directa de los trabajadores, como expresión del avance de la revolución socialista, en una lucha por igual antiburguesa y antiburocrática. Sin embargo, por su composición política, la Asamblea no estaba en condiciones de llevar a la práctica ese reclamo de las masas y la concreción real de su autoimagen como órgano de poder del frente de las clases explotadas y medias, bajo la conducción del proletariado revolucionario, frente al vacilante poder del gobierno y frente a la conspiración contrarrevolucionaria del imperialismo y de las fuerzas armadas reaccionarias.

Esa imagen de dualidad de poderes levantada por las declaraciones de la Asamblea no tenía asidero real, porque para ello habría sido necesario no solamente el reconocimiento de las masas y su acatamiento universal, sino también y no menos fundamentalmente, la capacidad de imponer sus decisiones sobre las otras clases por lo menos parcialmente, a través de organismos militares constituidos por las milicias obrero-campesinas. Y aunque muchos sectores de la Asamblea reclamaron eso persistentemente, y todos los sectores verbalmente lo admitían y lo apoyaban, en la práctica no se dio ningún paso concreto para poner en marcha la organización de esas milicias.

A diferencia de 1952, cuando una situación real de dualidad de poderes con ventaja de los trabajadores, ya que el único poder armado era el de ellos frente a los poderes administrativos del gobierno del MNR, no fue reconocida por ningún partido; ahora, en las peculiares condiciones de 1971, toda la izquierda y en particular el POR y los grupos más radicales levantaban esta imagen de dualidad de poderes, cuando el único poder armado real estaba en el ejército reaccionario y paralelamente en el gobierno reformista.

En los meses de Mayo y Junio de 1971, la victoria política de las masas parecía desarrollarse sin tropiezos, con los burgueses replegándose aterrados y el ejército dividido en fracciones competitivas. Pero mientras se desenvolvían las maniobras conspirativas en el ejército, la Asamblea Popular se mostraba impotente de organizar su propia base de poder armado para enfrentar esa pública amenaza. En Julio era obvio para muchos que la fase política del proceso estaba agotada y en adelante el enfrentamiento sólo podría ser armado. El gobierno de Torres, sabedor de las conspiraciones era incapaz de reprimirlas por temor de destruir a la fuerza armada, es decir, por temor a las masas revolucionarias dueñas del campo, y los trabajadores no habían podido levantar una organización capaz de llevar adelante las tareas pertinentes. Grupos pequeños como el ELN y el POR liderado por González Moscoso, la agrupación Siglo XX y otros menores, trataban en vano de cubrir ese déficit crucial. A fines de Junio, las facciones militares conspiradoras se habían ya coordinado bajo la dirección imperialista y brasileña y en Agosto Banzer podía derrotar la heroica resistencia popular y asumir el gobierno total del país.

Terminaba así, con una derrota y con la represión seciente contra ellas, una etapa más del esfuerzo de las masas explotadas bolivianas para conquistar su poder directo, porque lo mismo que en 1952 no había podido contar con ninguna dirección política apta para canalizar ese esfuerzo y conducirlo a esa conquista, no obstante condiciones objetivas adecuadas para ello.

Puede decirse en descargo de las masas bolivianas, que no solamente fallaron sus direcciones políticas, sino que el apoyo internacional del movimiento revolucionario y de los centros

de poder que podrían proporcionarlo fue casi nulo. La Unidad Popular en el gobierno de Chile, por su chauvinismo y su confusión interna, no pudo entender que el proceso boliviano era capital para su propio desarrollo y no se ocupó mayormente de él. Cuba en la misma etapa y sobre todo en los momentos cruciales de mayo-junio, cantaba las glorias de la "revolución peruana" de Velasco mientras simplemente atacaba a los militares bolivianos causantes de la muerte del Che, y cuando en Julio empezó a comprender que allí había un proceso vital para la revolución latinoamericana e invitó a una delegación de los sindicatos bolivianos a las celebraciones del 26 de Julio, era casi en la víspera del golpe de Bánzer.

Si semejante proceso hubiera estado en marcha en Argentina o Chile, por ejemplo, todos los analistas y turistas revolucionarios de Europa y de Estados Unidos habrían estado atentos a él, debatiéndolo y visitándolo, como ocurría en Chile en ese mismo momento. Pero ocurría en Bolivia, un pobre y oscuro país de obreros y campesinos de origen indio. ¿Era eso lo que impedía ver que allí se desarrollaba lo que era potencialmente el más profundo movimiento de las masas, desde sus bases mismas, por conquistar el poder directo de los explotados? El eurocentrismo es una carga que no solamente cargamos los latinoamericanos, sino una traba infeliz para el propio movimiento revolucionario europeo y norteamericano. Y junto a eso, obviamente estaba presente en ese "descuido" de los analistas políticos de la izquierda internacional, el lastre burocrático contra un movimiento de masas que por tantos años se levanta no solamente contra el capital, la burguesía y sus Estados, sino también contra los engendros burocráticos que nacen desde el seno mismo de las revoluciones contra aquellos. Mientras que han corrido ríos de tinta publicando estudios sobre Chile, lo que es indispensable, apenas unos pocos y rápidos estudios se conocen sobre el proceso boliviano de esa misma etapa, lo que es aún más indispensable por el carácter socialista revolucionario y antiburocrático que tiende siempre a asumir la lucha de los trabajadores de ese país.

LOS EFECTOS DE LA DICTADURA DE BANZER

El golpe militar de Bánzer fue dirigido por el imperialismo norteamericano, con la participación de agentes de la dictadura militar brasileña y por supuesto de la burguesía local, muy especialmente de los grupos de origen alemán, como lo reconocieron públicamente poco después, y el apoyo del MNR de Víctor Paz Estenssoro.

El régimen de Bánzer no pudo destruir a fondo el movimiento y las organizaciones sindicales y políticas de las masas bolivianas, como pudo hacerlo dos años después el golpe de Pinochet en Chile. Eso se debió, ante todo, a la resistencia armada de las masas durante los dos primeros días del golpe, con la participación importante del regimiento de Los Colorados, capitaneado por el Mayor Rubén Sánchez. Pero, también, porque el grado de participación de las masas bolivianas en sus organizaciones de masas no puede ser destruido sin una operación genocida muy extensa entre los trabajadores, lo que dada la extrema debilidad de la burguesía y de las capas medias bolivianas es una empresa que no podrían llevar a cabo sin poner en riesgo su propia base de explotación.

Eso permitió que, no obstante la represión y las torturas y encarcelamientos, la mayor parte de las direcciones sindicales y políticas pudieran mantenerse prácticamente intactas, sea en el exilio o en la clandestinidad, constituyendo de ese modo una base de resistencia permanente contra la dictadura banzerista. Y en efecto, sucesivas huelgas de obreros mineros y fabriles durante sus siete años de gobierno, demostraron a la dictadura que no podía dominar a las masas.



Paralelamente, un nuevo factor político-social fue emergiendo como parte de esa resistencia. El campesinado, cuya gran mayoría había quedado desde los primeros gobiernos del MNR sujeto a las manipulaciones burocráticas de los caciques rurales corrompidos por esos gobiernos, y más tarde del Pacto-Militar impuesto por Barrientos por esos mismos medios, había ido entrando en un proceso de descomposición y diferenciación social local y de migraciones masivas hacia las ciudades principales y hacia las zonas agrarias capitalistas del Oriente. Esos fenómenos eran la indicación de que el minifundio establecido como dominante en la tenencia de la tierra desde la reforma agraria del 52, era corroído rápidamente por la diversificación lenta e irregular del capital en el país, la monetización creciente de las relaciones de mercado rural, haciendo que esa estructura económica campesina fuera cada vez menos capaz de contener la creciente población dentro de las relaciones previas y el proceso de liberación de mano de obra rural alimentaba las migraciones y la semiproletarianización local y proletarianización campesina en las regiones agrarias capitalistas. Esos factores explican por qué aunque el Pacto Militar-Campesino fue restaurado formalmente por Bánzer como instrumento contra el movimiento obrero, sectores amplios del campesinado comenzaron a actuar independientemente y finalmente en contra del gobierno de Bánzer, como quedó pronto de manifiesto con las conocidas acciones de bloqueo de caminos del área de Cochabamba, contra mismo del Pacto, y contra las cuales Bánzer contestó masacrando a los campesinos y enajenándose en adelante su apoyo. Las bases materiales y subjetivas de la recuperación de la alianza entre los trabajadores mineros, fabriles, proletariado y semiproletariado agrario de Santa Cruz y el campesinado de los valles y del Altiplano, estaban siendo rápidamente restablecidas, bajo nuevas condiciones.

El apoyo financiero imperialista y la autosuficiencia energética del país, permitieron con todo que en el período banzerista la economía capitalista boliviana, tan extremadamente atrasada dentro del orden imperialista, se produjera una relativamente importante extensión y diversificación del capital, aunque ciertamente más en las minas de propiedad privada, en la agricultura y el comercio, y en la construcción urbana y el transporte, sobre cuyas actividades además se afirmó una fuerte especulación financiera. En cambio, en la industria fa-

bril prácticamente no se produjo ninguna ampliación ni tecnificación apreciable. Y aún hoy, las cifras sobre la industria fabril muestran que no han habido cambios significativos en los últimos 25 años.

Sobre estas bases se amplió algo la burguesía boliviana, sobre todo en sus grupos de especulación urbana y comercial, como se expresa en el boom de construcciones en La Paz y otras poblaciones cercanas. Pero sobre todo se ampliaron y se diversificaron las capas de mediana y pequeña burguesía urbana y rural, y las capas medias profesionales y burocráticas, a favor de la extensión de las actividades terciarias y del Estado.

Nada de eso, sin embargo, permitiría sostener que la burguesía boliviana como grupo social real, haya crecido fuertemente y se haya densificado su presencia social, cultural e ideológica entre las masas, pues sigue siendo extremadamente débil en esos términos. Y en el caso de las capas medias (pequeña burguesía y asalariadas), aunque su ampliación y su diversificación son considerablemente mayores que para la burguesía misma, y por ello son ahora un factor social e ideológico y político más significativo que antes, tampoco podría decirse que han llegado a constituir un terreno de maniobra política amplio y diferenciado, un colchón de apoyo decisivo para regímenes de corte democrático y reformista, como en otros países, el Perú por ejemplo.

Del lado de los trabajadores y en particular de la clase obrera, fue ocurriendo también una paralela ampliación y diversificación relativamente importante, por el engrosamiento de los sectores terciarios, del semiproletariado urbano y rural, quedando los fabriles estancados, mientras que en la minería ha venido reduciéndose numéricamente el proletariado en las minas estatizadas y creciendo más bien los grupos obreros de la minería privada, donde la organización sindical es casi nula y desde luego la educación política revolucionaria. El papel excepcionalmente destacado del proletariado minero, como la punta avanzada de la conciencia política de la clase, no ha desaparecido pero se ha reducido, y su rol de dirigente práctico del movimiento del conjunto de las masas sin duda ha declinado considerablemente, sin extinguirse.

Todos esos factores, han ayudado probablemente a que las reiteradas frustraciones del movimiento obrero y del resto de los trabajadores, con las previas direcciones políticas que marcaban la ruta teórica y estratégica del movimiento, a pesar de su pequeñez y endeblez orgánica, como el POR y en general las corrientes trotskistas, hayan ido alejando a los obreros de esas corrientes y ligándose más a las tendencias y organizaciones como el PCB (pro-Moscú) y a las que se asientan sobre todo en las capas medias intelectuales y profesionales radicalizadas, como el MIR y en menor medida en las nuevas organizaciones que emergían con líderes de fuerte personalidad como el Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz. En efecto esas organizaciones han ido creciendo en influencia y arraigo en las masas, mientras los trotskistas se han dividido aún más y tienen un lugar sin comparación alguna con el que tuvieron en las previas etapas, lo mismo que el PC pro-chino, de destacada actuación durante la Asamblea Popular, que también ha declinado evidentemente.

En cambio, el campesinado fue emergiendo como una nueva fuerza política, a lo largo de un impresionante proceso de movilización y de organización, en el cual deben ser destacados dos rasgos. Uno, el crecimiento de tendencias y organizaciones orientadas por una suerte de nuevo indigenismo y que se reclaman de bases étnicas, como el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK), que se reclama representante de los indios aymaras. Dos, la notable participación de las mujeres en la movilización y organización de los campesinos, principalmente en el Altiplano próximo a La Paz, y que se explicaría en razón del papel central de ellas en la actual economía rural, por la migración de los varones.

Al converger estos movimientos campesinos nuevos con la resistencia de obreros y capas medias radicalizadas, y bajo la presión "carterista" sobre los regímenes militares del Sur, Bänzer se vio obligado primero a tentar una apertura liberal delante de una imponente huelga de hambre masiva en todas las ciudades, secundu a huelgas de mineros y fábricas, demandando el restablecimiento de la democracia, y poco después a llamar a elecciones generales, en 1978.

EL MOVIMIENTO DE MASAS ENTRE LA IMPOSIBLE DEMOCRACIA BURGUESA Y LA AUSENCIA DE UNA DIRECCION REVOLUCIONARIA.

Son conocidos los incidentes vinculados a las elecciones de 1978. Fraudulentamente cocinados sus resultados, frente al descontento popular el General Pereda dio un simulado golpe de Estado a Bänzer reclamando ser el vencedor de las elecciones, y fue a su vez desalojado del mismo modo por el General Padilla, jefe de las tendencias institucionalistas del ejército, quien llamó a nuevas elecciones, en 1979. Indecisos los resultados, porque ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría legal, el Parlamento elegido no logró ponerse de acuerdo en la designación de un Presidente de la República constitucional, y el presidente del propio Parlamento, Guevara Arze, fue designado Presidente Interino de la República con la misión de llamar a nuevas elecciones, ocupando su lugar en la presidencia del parlamento Lidia Gueiler, ex-trotskista, ex-lechista y en ese momento adherida a la fracción Paz Estensoro del MNR.

Durante todo ese forcejeo, los trabajadores organizados volvieron a restablecer sus organizaciones de base y su central nacional la COB. Esta vez, sin embargo, tanto la PSTMB como la COB aparecían bajo la influencia mayoritaria de delegados pertenecientes al PCB (pro-Moscú), al MIR, al PS-L y al PRIN, prácticamente desalojados de escena el POR y el PCM-L (pro-chino), aliado ahora a Paz Estensoro. Y en consecuencia, con direcciones políticas cuyo único proyecto era la afirmación de un régimen democrático-burgués pleno.

A pesar de ello, las bases obreras no tardaron en presionar por sus reivindicaciones materiales y a poner de nuevo en primer plano sus inevitables impulsos a utilizar como instrumentos de poder político sus organismos sindicales centrales, rebasando las limitaciones gremiales que las nuevas direcciones trataban de imponer sin conseguirlo, como veremos luego, porque en las condiciones bolivianas concretas, tal como vienen determinadas por toda la historia desde 1952, las masas no pueden dejar de empujar a sus organizaciones en esa dirección cualquiera que sea la imagen que del proceso tengan las direcciones partidarias que asumen el control de esas organizaciones, ni esas direcciones pueden contenerse puramente en el marco gremial, dada la agudeza de las luchas políticas donde los actores son las masas más que los partidos, frente a las fuerzas armadas más que frente a los grupos empresariales o partidos de la burguesía.

Un precario régimen civil, encabezado por Guevara Arze en el primer momento, estaba atrapado entre las presiones reivindicativas de las masas y las de las fuerzas armadas, como no podría dejar de estarlo cualquier otro régimen democrático en ese país, por la casi total carencia de un colchón intermedio de apoyo y de maniobra entre ambos contendientes. Y, especialmente uno que como aquel era presidido por una ideología vagamente reformista y democrático burguesa, como es la de Guevara Arze.

A esa situación se añadió la denuncia, con pruebas en la mano, de la escandalosa corrupción del régimen saliente con los

fondos públicos, y que agitada por la vigorosa personalidad de Quiroga Santa Cruz en el Parlamento afectaba a una buena parte de los militares, amenazados de juicio público.

Esos hechos desataron la escalada reaccionaria del ejército, que se defendía de la ofensiva popular alegando —como en todos los demás países— que tales denuncias ofendían a las "instituciones tutelares de la patria" (Pobres patrias tuteladas por semejante cáfila!). Y en Noviembre de 1979, un golpe de Estado encabezado por el Coronel Natusch Busch desató, como en octubre y enero de 1970-71, la insurrección popular, concitando esta vez, también el rechazo abierto del Departamento de Estado norteamericano.

El golpe de Natusch se presentaba vistiendo, como se fue para las masas, un ropaje nacionalista y populista. Y eso, sin duda, fue lo que llevó al PCB a tomar frente a él una actitud conciliadora, denunciada luego por los demás integrantes de la UDP, sobre todo el MIR, así como el coqueteo inicial de Paz, que pronto retrocedió vista la actitud del Dpto. de Estado.

Durante las intensas jornadas de la primera semana de Noviembre de 1979, los partidos de izquierda como tales desaparecieron del escenario, como todos reconocen después, mientras las masas obreras y campesinas, ahora unidas, resistían con una huelga general y bloqueos de caminos en todo el país, e iniciando acciones de insurrección armada allí donde eso era posible, como en algunos de los pueblos mineros de Oruro. El régimen de Natusch fue obligado a negociar, y entregar el gobierno al Parlamento, otra vez, que eligió a Lidia Gueiler como Presidente Interino de la República en lugar de Guevara Arze.

Allí, en esas circunstancias, fue probablemente cuando se definió en una parte importante el destino del proceso boliviano de esta etapa, demostrando con claridad meridiana las grandes distancias entre las necesidades e impulsos de la bases de trabajadores y las direcciones partidarias de sus centrales. Las bases, sobre todo los mineros y fabriles continuaron la huelga en demanda de castigo de los militares golpistas y su expulsión de la fuerza armada, en un momento en que eso era realmente factible, por la presencia de un sector institucionalista que pugnaba por imponerse en el comando contra los sectores ultraderechistas que encabezaba, precisamente, el General García Meza. Bajo la presencia movilizada de las masas, ese sector institucionalista podía llegar a imponerse. Sin embargo, los dirigentes de la COB (moscovitas, miristas y lechinistas) con Lechin a la cabeza, ordenaron el repliegue de las masas y la cesación de la huelga general. Los mineros aún resistieron la orden y Lechin fue obligado a ir personalmente a persuadir a los trabajadores. Las direcciones transaban, pues, con la hegemonía de los ultraderechistas en el comando de las fuerzas armadas.

El principal dirigente mirista de los obreros fabriles de La Paz, en mayo de este año, pudo decir por eso que en esas jornadas se logró derrotar el golpe de Natusch, lo que ciertamente era un éxito, pero a costa de una posible derrota de las masas en el plazo próximo ya que se había permitido imponerse a los ultraderechistas en las fuerzas armadas, que no tardarían en dar el golpe.

El régimen de Lidia Gueiler quedaba, así, mucho más débil aún que el de Guevara Arze, colocado entre un movimiento de masas más impulsado y más combativo después de las jornadas de noviembre, y una fuerza armada a cuya cabeza estaban colocados los sectores más reaccionarios. La escena, en adelante, sería claramente dominada por ese agudo y neto enfrentamiento entre los trabajadores organizados y centralizados en la COB y las fuerzas armadas reaccionarias, puesto que en el ámbito interno del país no quedaban en realidad sino dos enemigos centrales. Los demás actores, incluido el gobierno de Lidia Gueiler, eran comparsas secundarias.

Como curioso reconocimiento de esta realidad, y cumplimiento de la política del Departamento de Estado y de Carter, el Embajador norteamericano en La Paz, en un gesto insólito pero ilustrativo, hizo una visita diplomática al Secretario General de la COB, Juan Lechin, en sus oficinas de la COB. Extraña, pero no muy sorprendentemente, en la pugna política boliviana, las masas y sus centrales organizadas se encontraban en la curiosa situación de ser apoyadas por nada menos que la diplomacia imperialista norteamericana, en su lucha contra los militares golpistas. La explicación puede ser obvia, en cierto modo. Para los intereses políticos del "carterismo", no se trataba solamente de impedir un golpe ultraderechista por razones democráticas, sino como una vía de ir encuadrando el conflicto en los límites de una lucha democrática e impedir el avance del poder directo de los trabajadores. En esa vía, podían contar con el auxilio de las direcciones conciliadoras de la COB, a su modo interesadas en no facilitar a las masas el camino de su propio poder. Pero, tal vez otro factor menos obvio motivaba esos trajes del Embajador yanqui. Bolivia no puede estar fuera de las disputas internacionales de poder. Lo que, quizás, explica por qué el actual régimen de García Meza tiene el rechazo de Estados Unidos y acaba de ganar el reconocimiento de Rusia. Impedir un golpe militar en Bolivia, en esta coyuntura, para los Estados Unidos no forma pues parte de una vocación democrática, sino de sus necesidades estratégicas internacionales en América Latina, mientras brega con las cuestiones centroamericanas.

Desde comienzo de 1980, los trabajadores no solamente insistieron en sus demandas reivindicativas, sino también comenzaron de nuevo a empujar a sus centrales como instrumentos de poder y de negociación con el régimen interno, sobre la política económica misma del Estado y no meramente por reivindicaciones parciales. La COB, a pesar de sus dirigentes, no podía dejar de conducirse como lo que de hecho es o tiende a ser, un órgano de poder de los trabajadores.

Al mismo tiempo, sin embargo, las direcciones políticas, los partidos focalizaban exclusivamente su atención en los problemas electorales pendientes. En su debate, habían desde luego matices de mayor o menor radicalismo. Así, mientras de un lado, los partidos de la UDP sostenían que todo el proceso tenía una perspectiva puramente democrática, y que la tarea era afianzar la democracia ante todo, es decir la democracia burguesa en la práctica, el PS de Marcelo Quiroga planteaba la necesidad de debatir un programa antes de discutir candidaturas, y la inclusión de la nacionalización de la mediana minería y de la banca, como bases indispensables para todo programa de gobierno. A ello la UDP contestaba calificando de extremistas esas demandas, y presionando por la unificación de toda la izquierda en torno de la candidatura presidencial de Siles Suazo y de Paz Zamora como su vicepresidente. No hubo acuerdo, al final.

Dos escenarios se movían, pues, en Bolivia de 1980. Uno, el de la institucionalidad de la democracia burguesa, por cuya afirmación bregaban exclusivamente los partidos mayoritarios y arrastraban a las masas a encuadrarse en tal escenario. Otro, sin embargo, era el más profundo y a la postre más decisivo, como se reveló muy pronto, el de los choques de clases que ponían en cuestión las bases mismas del Estado burgués en Bolivia.

El énfasis exclusivo de los partidos de izquierda en el escenario institucional era un camino ciego. Para no sólo, tendría que apoyarse en bases sociales inexistentes en ese país: una burguesía suficientemente fuerte como para asimilar las presiones de las masas en condiciones democráticas, aunque fuera por corto tiempo, con amplias capas medias aliadas y que permitieran a la institucionalidad democrática burguesa un terreno de intermediación real y estable entre las masas y la burguesía, todo, lo cual, desde luego, implicaría que las masas pudieran ser contenidas, no solo imaginativamente sino en la práctica, en los límites de esas relaciones políticas.

Bolivia, no obstante, no reúne y muy difícilmente podría reunir en el futuro semejantes condiciones sociales. Por ello, los choques de clases tienden a ser inmediatamente demasiado agudos como para ser institucionalizadas en las redes de la democracia parlamentaria, y eso independientemente de lo que pase por la cabeza de sus protagonistas. No hay duda de que la relativa diversificación del capital bajo Bínzer ha producido la sombra de esas condiciones, colocando a las capas medias democrático-nacionalistas, con el apoyo del reformismo obrero-burocrático, frente a un espejismo: la posibilidad efectiva de una democracia burguesa estable. Y la casi desintegración de los grupos políticos que, por su defección en momentos cruciales han sido actualmente abandonados por las masas, permite que esas imágenes dominen inclusive las capas burocráticas del movimiento obrero. Todo ello, sin embargo, no podía bastar para producir las condiciones necesarias para una posibilidad democrático burguesa. Esta en Bolivia hoy, es simplemente una imposibilidad histórica, y la democracia no podría imponerse en ese país sino como la democracia directa de las masas o no llegar.

Son esas las condiciones que explican que a fines de Abril, el enfrentamiento entre la COB y las Fuerzas Armadas hubiera llegado tan lejos que hizo pensar a los dirigentes de la COB en la necesidad de un arreglo con los militares. En efecto, pidieron y obtuvieron de la presidenta Gueiler, la organización de una reunión entre el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, presidido por García Meza y el Consejo Directivo entero de la COB, presidido, por Juan Lechín, el viejo líder obrero de tan largo historial de conciliaciones.

En esa reunión se llegó, en principio a una suerte de tregua, con promesas de la COB de rebajar la violencia del lenguaje de los trabajadores, y de los militares de no continuar con sus amenazas de golpe. Pero pocos días después era el desfile del 10 de Mayo en la Paz, que fue indudablemente el más importante de toda América Latina, por su significado y su magnitud.

Una marcha de alrededor de cien mil trabajadores, la mitad de los cuales campesinos y de mujeres campesinas en alta proporción, desfilara largamente por las calles centrales de La Paz, y aunque los discursos de los dirigentes secundarios (Lechín no asistió, para no tener que enfrentarse a las masas con un lenguaje que sabía que ellas no admitirían) fueran moderados, nada podía impedir que los carteles y las consignas que la masa voceaba fueran consignas revolucionarias, que apuntaban a la revolución socialista, al poder directo de los trabajadores, menos que a las elecciones, democráticas o no.

Esa marcha culminaba la soldadura entre el movimiento obrero y el campesino, enterrando el Pacto Militar-Camperino, y ampliando la base social y numérica del movimiento revolucionario. Y frente a ello y a la combatividad y dirección demostrada por las masas en las calles, para la fuerza armada reaccionaria y la miserablemente débil burguesía boliviana, la opción evidente no podía ser la de las elecciones sino la de preparación de un golpe militar exitoso, que no repetiría las vacilaciones de Noviembre pasado.

En los meses que siguieron hasta el golpe en julio siguiente, el General García Meza se dedicó sistemáticamente a depurar las filas militares de todos los institucionalistas y prodemocráticos, lo que consiguió plenamente por el momento. Y, al mismo tiempo, a desplegar una diaria propaganda contra las masas, levantando las banderas fascistas de la "democracia inédita" a lo Pinochet, de quien se declaró seguidor, y para conmover a la pequeña burguesía reaccionaria, a levantar el "nacionalismo" contra la intervención norteamericana en contra del golpe. Reiteró hasta el cansancio que estaba preparado el golpe y que no dejaría de darlo en el momento oportuno. Nunca hubo golpe más voceado y anunciado.

Puede parecer sorprendente que en tales circunstancias, la mayor parte de los partidos de izquierda se dedicaran con mayor devoción aún a la preparación exclusiva de las elecciones, proclamando que si se daba el golpe responderían con otra huelga general como la de noviembre, y montando un Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) como supuesta organización capaz de oponerse exitosamente al golpe como central de todos los sectores de masas.

En realidad, CONADE no podría ser sino una entidad nominal, cuya única vertebradura orgánica real era la COB, apta para producir comunicados de denuncia y de protesta, pero no para movilizar y acaudillar a las masas en la arena del inevitable enfrentamiento. Y, de otro lado, tras el fracaso de noviembre y frente al despliegue de los trabajadores del 10 de Mayo, las fuerzas armadas no podían permitirse intentar un golpe sin tener todas las condiciones preparadas: depuración y control de los mandos militares claves, apoyo externo consolidado, argentino esta vez, y una demagogia desahogada contra el intervencionismo norteamericano. Ni, finalmente, podían permitir la instalación de un régimen civil elegido democráticamente no tanto por el temor a lo que pudieran hacer los nuevos gobernantes, guiados por un programa inconsistente y rechazando inclusive medidas como la nacionalización de la minería mediana y de la banca, sino ante todo por el temor a que bajo un tal régimen pudiera desatarse un despliegue de las masas en una dirección que, como corrobora toda la historia anterior del país, apuntaría inevitablemente a la conquista del poder directo de los explotados y a la destrucción del Estado burgués.

Nada de eso pasaba por la conciencia de las direcciones políticas de la UDP y de las demás organizaciones menores que habían logrado el triunfo electoral relativo. Lo prueba inclusive el hecho de que el día mismo del golpe y dudando de que existiera, fueran a reunirse nada menos que en el local central de la COB, los dirigentes políticos y sindicales principales, salvándose Sales Suazo, el candidato vencedor, por llegar tarde a la reunión y Paz Zamora por estar en tratamiento médico en el exterior, víctima de un intento de asesinato.

En Bolivia, se reitera con esta nueva derrota de las masas la imposibilidad histórica de la democracia burguesa y el callejón hacia la derrota y la masacre al que condenan a las masas las direcciones que alientan la ilusión de afirmar solamente un régimen democrático burgués. Se reitera que cualesquiera que sea aún el peso relativo de las tareas democrático nacionalistas no resueltas, ellas no pueden culminar ya sino como parte de otra democracia, la de las masas mismas, tras la destrucción de las fuerzas armadas y del aparato institucional del Estado burgués. Con la revolución socialista, en definitiva.

El golpe de García Meza estaba pues dentro de las objetivas necesidades de la burguesía imperialista y local en la coyuntura boliviana de ese preciso momento. No se trataba, en consecuencia, de ganar las elecciones solamente, sino de impedir la materialización del tan anunciado golpe, organizando las bases materiales y políticas de la violencia de las masas. Después de la experiencia de noviembre en ese momento no se podía simplemente pretender responder al golpe con la amenaza de una nueva huelga general, imposible en las condiciones de una represión generalizada, con una fuerza armada bajo pleno control de sus mandos reaccionarios. Había que impedir el golpe. Y no eran las elecciones, la manera de hacerlo.

Las masas bolivianas han sido derrotadas una vez más, y cada nueva derrota aparea mayores dificultades para la próxima etapa de crisis política. Casi hay un consenso entre la izquierda boliviana para sostener que el régimen militar actual es muy débil y que podrá ser muy pronto derrocado por la resistencia de las masas. Tal vez y ojalá, eso sea así. Pero quizás no hay que llevar muy lejos la sustitución de la realidad con los deseos. El régimen militar, con o sin García Meza, no es tan

débil como parece mientras las direcciones políticas de las masas no abandonen la ilusión de una democracia burguesa como alternativa única para terminar con esta larga historia de frustraciones.

Las masas bolivianas no dejarán de resistir y luchar, qué duda cabe. Y es tarea de todos, ayudarlas a conquistar sus objetivos reales, los de la revolución socialista. Parte de esas tareas, es aprender las lecciones centrales de esas frustraciones y abandonar nosotros, en nuestros propios países las ilusiones de las capas medias sobre el reformismo democrático-nacionalista y el oportunismo conciliador del reformismo burocrático bajo cualquiera de sus expresiones y adhesiones internacionales, moscovitas o pekinenses, y depurarse igualmente de las consecuencias y del burocratismo práctico de los trotskistas. La revolución latinoamericana no puede triunfar hoy, en ningún lado, sino como parte de la revolución socialista.

No se sigue de allí que las tendencias nacionalistas y democráticas reales en el seno de las masas deben ser segregadas del movimiento socialista revolucionario. Este no podría desarrollarse sin aquellas, ni éstas culminar sin el socialismo. De lo que se trata es de aprender, de una vez por todas, que las diferencias estratégicas no suponen la división del movimiento de masas en la lucha diaria, sino el debate serio y honrado en la pugna por la dirección de las masas.

En el período de resistencia contra la dictadura militar, si las corrientes democrático-nacionalistas radicales, que tienen ahora la hegemonía política del movimiento de masas bolivianas, y las corrientes revolucionarias socialistas, minoritarias pero activas, no son capaces cada cual de romper con sus propias prisiones ideológicas y desarrollar unidas la lucha común, la dictadura no puede ser debilitada a fondo y pronto derrotada.

Esa lucha de resistencia no puede pasar por fuera del poder aglutinador de la dirección de las primeras. Pero no puede ser contenida dentro de los límites exclusivos de la democracia burguesa, a la que apuntan esos sectores. Y del otro lado, sin apoyarse en las necesidades democrático-nacionalistas del movimiento de masas y sin apoyarlas, la lucha por la culminación socialista de la lucha democrática, condición para impedir una nueva etapa de derrotas, no puede ser impulsada.

Y no se trata solamente de unidad entre las organizaciones de la izquierda. Se trata ante todo de la unidad de las organizaciones directas de las masas, dentro de las cuales debe ejercitarse la anterior. De ese modo las masas explotadas de Bolivia, y su dirección proletaria, encontrarán, al fin, un canal de desarrollo hacia su propio poder, hacia su democracia directa, que ha demostrado ser en una historia larga y cruenta, la aspiración y el motor profundo del movimiento político de los trabajadores de ese país. La revolución boliviana no parece tener otras condiciones de victoria que no sea el desarrollo y canalización del más profundo impulso histórico de sus masas. A ellas, a su histórico ejemplo revolucionario, nuestra entera solidaridad.

Una bibliografía básica sobre la historia política boliviana contemporánea, es la siguiente:

1. Herbert S. Klein: *Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana*. La Paz, 1968.
2. Guillermo Lora: *La Revolución Boliviana*. La Paz, 1963.
— *Historia del Movimiento Obrero Boliviano*. 4 vols.
— *Movimiento Obrero Contemporáneo (1952-1979)*. La Paz, 1979.
— *Estudios Histórico-Políticos sobre Bolivia*.
3. Liborio Justo: *Bolivia: La Revolución Derrotada*. Buenos Aires, 1971 2a. Edición.
4. Eduardo Fioravanti: *L'esperienza della Assemblea Popolare in Bolivia*. JACA BOOK, Milano 1973.
5. Sergio Almaraz: *El Poder y la Caída*. La Paz, 1967.
— *Requiem para una República*. La Paz, 1969.
6. René Zavaleta: *El Poder Dual*. Siglo XXI, México 1972.
7. Augusto Céspedes: *El Dictador Suicida* (varias ediciones).
— *El Presidente Colgado* (varias ediciones).

